



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS
JUZGADO ESPECIALIZADO DE CONTROL DEL ÚNICO DISTRITO JUDICIAL,
SEDE XOCHITEPEC, MORELOS
RAMÓN VILLANUEVA URIBE

Sentencia de procedimiento abreviado.

CARPETA TÉCNICA. JC/1598/2019.

PODER JUDICIAL

H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

SENTENCIA DE PROCEDIMIENTO ABREVIADO.

Atlacholoaya, Xochitepec, Morelos; al primer (1) día del julio de dos mil veintiuno (2021).

Escuchados que fueron los intervinientes, el de la voz, **Juez Especializado de Control del Distrito Único con sede en Xochitepec Morelos**, procede a resolver, sobre la nueva situación jurídica del acusado ***** por el hecho tipificado como delito de **SECUESTRO EQUIPARADO** previsto y sancionado por el artículo 15¹ fracciones III y V de la Ley General para Prevenir y Sancionar los delitos de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en correlación con el contenido de los artículos 7² fracción I (acción e instantáneo), 8³ (delitos dolosos o culposos), 9⁴ (doloso) y 13⁵ fracción III (realización conjunta o coautoría) del Código Penal Federal; hecho cometido en agravio de la víctima quien en vida respondiera a las iniciales ***** , del que **con esta fecha se verificó legalmente JUICIO ABREVIADO** y cerrado el debate en torno a la acusación, de esa misma fecha se dictó fallo condenatorio.

✓ *****.- de ***** años, con fecha de nacimiento ***** de ***** de ***** . Originario del estado de

UNA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PRONTA, GRATUITA Y HONESTA ES DIGNA DE ASPIRACIÓN SOCIAL; A SU REALIZACIÓN USTED PUEDE Y DEBE COLABORAR

¹ **Artículo 15.** Se aplicará pena de cuatro a dieciséis años de prisión y de mil cuatrocientos a tres mil días multa, al que: I. Después de la ejecución de cualquiera de las conductas previstas en los artículos 9 y 10 de la presente Ley, y sin haber participado en cualquiera de ellas, adquiera o reciba el producto de las mismas a sabiendas de esta circunstancia; II. Preste auxilio o cooperación al autor de cualquiera de las conductas previstas en los artículos 9 y 10 de esta Ley, con conocimiento de esta circunstancia, por acuerdo posterior a la liberación de la víctima; III. Oculte o favorezca el ocultamiento del responsable de ejecutar cualquiera de las conductas previstas en los artículos 9 y 10 de esta Ley, con conocimiento de esta circunstancia, así como los efectos, objetos o instrumentos del mismo o impida que se averigüe; IV. Altere, modifique o destruya ilícitamente el lugar, indicios, evidencias, objetos, instrumentos o productos del hecho delictivo, o V. Desvíe u obstaculice la investigación de cualquiera de las conductas previstas en los artículos 9 y 10 de esta Ley, o favorezca que el imputado se sustraiga a la acción de la justicia. No se aplicará la pena prevista en este artículo en el caso de la fracción III, en lo referente al ocultamiento del infractor, cuando se trate de: a) Los ascendientes o descendientes consanguíneos o afines directos, o b) El cónyuge, la concubina, el concubinario y parientes colaterales por consanguinidad hasta el segundo grado.

² **Artículo 70.-** Delito es el acto u omisión que sancionan las leyes penales. En los delitos de resultado material también será atribuible el resultado típico producido al que omita impedirlo, si éste tenía el deber jurídico de evitarlo. En estos casos se considerará que el resultado es consecuencia de una conducta omisiva, cuando se determine que el que omite impedirlo tenía el deber de actuar para ello, derivado de una ley, de un contrato o de su propio actuar precedente. El delito es: **I.-** Instantáneo, cuando la consumación se agota en el mismo momento en que se han realizado todos sus elementos constitutivos; **II.-** Permanente o continuo, cuando la consumación se prolonga en el tiempo, y **III.-** Continuo, cuando con unidad de propósito delictivo, pluralidad de conductas y unidad de sujeto pasivo, se viola el mismo precepto legal.

³ **Artículo 80.-** Las acciones u omisiones delictivas solamente pueden realizarse dolosa o culposamente.

⁴ **Artículo 90.-** Obra dolosamente el que, conociendo los elementos del tipo penal, o previendo como posible el resultado típico, quiere o acepta la realización del hecho descrito por la ley, y Obra culposamente el que produce el resultado típico, que no previó siendo previsible o previó confiando en que no se produciría, en virtud de la violación a un deber de cuidado, que debía y podía observar según las circunstancias y condiciones personales.

⁵ **Artículo 13.-** Son autores o partícipes del delito: **I.-** Los que acuerden o preparen su realización. **II.-** Los que los realicen por sí; **III.-** Los que lo realicen conjuntamente; **IV.-** Los que lo lleven a cabo sirviéndose de otro; **V.-** Los que determinen dolosamente a otro a cometerlo; **VI.-** Los que dolosamente presten ayuda o auxilien a otro para su comisión; **VII.-** Los que con posterioridad a su ejecución auxilien al delincuente, en cumplimiento de una promesa anterior al delito y **VIII.-** los que sin acuerdo previo, intervengan con otros en su comisión, cuando no se pueda precisar el resultado que cada quien produjo. Los autores o partícipes a que se refiere el presente artículo responderán cada uno en la medida de su propia culpabilidad. Para los sujetos a que se refieren las fracciones VI, VII y VIII, se aplicará la punibilidad dispuesta por el artículo 64 bis de este Código.

***** , de nacionalidad ***** . Estado civil ***** , con ***** dependientes económicos, ***** . De ocupación ***** . Con instrucción ***** . Ingreso aproximado de ***** , presente como enfermedad ***** . El nombre de su madre es ***** , ***** . No pertenece a ningún pueblo originario. Sabe leer y escribir. Con domicilio antes de ser detenido el ubicado en calle ***** número ***** de la colonia ***** en el municipio de ***** , ***** .

Acusado que se encuentra privado de su libertad bajo la medida cautelar de prisión preventiva que le fue impuesta en audiencia de fecha cinco de marzo del año dos mil veinte, y detenido materialmente en flagrancia el día dos del mes y año señalado anteriormente, por lo que ha estado de privado de su libertad derivado de los hechos materia de la presente causa, **UN AÑO, TRES MESES y VEINTINUEVE DÍAS.**

La víctima indirecta de identidad reservada de iniciales ***** , de la cual se proporcionaron sus datos de manera reservada, en términos de lo que establece el artículo 109 fracción XXVI del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Por lo que se procede a dictar sentencia, la cual se realiza al tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS:

PRIMERO.- Este resolutor es competente para conocer y fallar dentro del presente asunto, toda vez que los hechos materia de acusación ocurrieron en este Distrito Único, con sede en Xochitepec, de manera particular en calle ***** número ***** de la colonia ***** del municipio de ***** , *****, lugar donde este Juzgador ejerce su jurisdicción, de conformidad con los artículos 1⁶, 2⁷, 4⁸, 5⁹, 6¹⁰, 7¹¹, 8¹², 9¹³, 10¹⁴, 11¹⁵,

⁶ **Artículo 1o. Ámbito de aplicación.** Las disposiciones de este Código son de orden público y de observancia general en toda la República Mexicana, por los delitos que sean competencia de los órganos jurisdiccionales federales y locales en el marco de los principios y derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.

⁷ **Artículo 2o. Objeto del Código.-** Este Código tiene por objeto establecer las normas que han de observarse en la investigación, el procesamiento y la sanción de los delitos, para esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y



PODER JUDICIAL
H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS
JUZGADO ESPECIALIZADO DE CONTROL DEL ÚNICO DISTRITO JUDICIAL,
SEDE XOCHITEPEC, MORELOS
RAMÓN VILLANUEVA URIBE

Sentencia de procedimiento abreviado.

CARPETA TÉCNICA. JC/1598/2019.

13, 16¹⁶, 20¹⁷ fracción I¹⁸, 52¹⁹, 67²⁰, 68²¹ del Código Nacional de Procedimientos Penales, 66^{22-bis}, 67²³, 69-bis fracción III y 70²⁴ de la Ley Orgánica del Poder Judicial vigente en el Estado.

UNA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PRONTA, GRATUITA Y HONESTA ES DIGNA DE ASPIRACIÓN SOCIAL;
A SU REALIZACIÓN USTED PUEDE Y DEBE COLABORAR

que se repare el daño, y así contribuir a asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.

⁸ **Artículo 4o. Características y principios rectores.** El proceso penal será acusatorio y oral, en él se observarán los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e intermediación y aquellos previstos en la Constitución, Tratados y demás leyes.

Este Código y la legislación aplicable establecerán las excepciones a los principios antes señalados, de conformidad con lo previsto en la Constitución. En todo momento, las autoridades deberán respetar y proteger tanto la dignidad de la víctima como la dignidad del imputado.

⁹ **Artículo 5o. Principio de publicidad.-** Las audiencias serán públicas, con el fin de que a ellas accedan no sólo las partes que intervienen en el procedimiento sino también el público en general, con las excepciones previstas en este Código. Los periodistas y los medios de comunicación podrán acceder al lugar en el que se desarrolle la audiencia en los casos y condiciones que determine el Órgano jurisdiccional conforme a lo dispuesto por la Constitución, este Código y los acuerdos generales que emita el Consejo.

¹⁰ **Artículo 6o. Principio de contradicción.-** Las partes podrán conocer, controvertir o confrontar los medios de prueba, así como oponerse a las peticiones y alegatos de la otra parte, salvo lo previsto en este Código.

¹¹ **Artículo 7o. Principio de continuidad.-** Las audiencias se llevarán a cabo de forma continua, sucesiva y secuencial, salvo los casos excepcionales previstos en este Código.

¹² **Artículo 8o. Principio de concentración.-** Las audiencias se desarrollarán preferentemente en un mismo día o en días consecutivos hasta su conclusión, en los términos previstos en este Código, salvo los casos excepcionales establecidos en este ordenamiento. Asimismo, las partes podrán solicitar la acumulación de procesos distintos en aquellos supuestos previstos en este Código.

¹³ **Artículo 9o. Principio de intermediación.-** Toda audiencia se desarrollará íntegramente en presencia del Órgano jurisdiccional, así como de las partes que deban intervenir en la misma, con las excepciones previstas en este Código. En ningún caso, el Órgano jurisdiccional podrá delegar en persona alguna la admisión, el desahogo o la valoración de las pruebas, ni la emisión y explicación de la sentencia respectiva.

¹⁴ **Artículo 10. Principio de igualdad ante la ley.-** Todas las personas que intervengan en el procedimiento penal recibirán el mismo trato y tendrán las mismas oportunidades para sostener la acusación o la defensa. No se admitirá discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condición de salud, religión, opinión, preferencia sexual, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas. Las autoridades velarán por que las personas en las condiciones o circunstancias señaladas en el párrafo anterior, sean atendidas a fin de garantizar la igualdad sobre la base de la equidad en el ejercicio de sus derechos. En el caso de las personas con discapacidad, deberán preverse ajustes razonables al procedimiento cuando se requiera.

¹⁵ **Artículo 11. Principio de igualdad entre las partes.-** Se garantiza a las partes, en condiciones de igualdad, el pleno e irrestricto ejercicio de los derechos previstos en la Constitución, los Tratados y las leyes que de ellos emanen.

¹⁶ **Artículo 16. Justicia pronta.** Toda persona tendrá derecho a ser juzgada dentro de los plazos legalmente establecidos. Los servidores públicos de las instituciones de procuración e impartición de justicia deberán atender las solicitudes de las partes con prontitud, sin causar dilaciones injustificadas.

¹⁷ **Artículo 20. Reglas de competencia.-** Para determinar la competencia territorial de los Órganos jurisdiccionales federales o locales, según corresponda, se observarán las siguientes reglas: **I.** Los Órganos jurisdiccionales del fuero común tendrán competencia sobre los hechos punibles cometidos dentro de la circunscripción judicial en la que ejerzan sus funciones, conforme a la distribución y las disposiciones establecidas por su Ley Orgánica, o en su defecto, conforme a los acuerdos expedidos por el Consejo; **II.** Cuando el hecho punible sea del orden federal, conocerán los Órganos jurisdiccionales federales; **III.** Cuando el hecho punible sea del orden federal pero exista competencia concurrente, deberán conocer los Órganos jurisdiccionales del fuero común, en los términos que dispongan las leyes; **IV.** En caso de concurso de delitos, el Ministerio Público de la Federación podrá conocer de los delitos del fuero común que tengan conexidad con delitos federales cuando lo considere conveniente, asimismo los Órganos jurisdiccionales federales, en su caso, tendrán competencia para juzgarlos. Para la aplicación de sanciones y medidas de seguridad en delitos del fuero común, se atenderá a la legislación de su fuero de origen. En tanto la Federación no ejerza dicha facultad, las autoridades estatales estarán obligadas a asumir su competencia en términos de la fracción primera de este artículo; **V.** Cuando el hecho punible haya sido cometido en los límites de dos circunscripciones judiciales, será competente el Órgano jurisdiccional del fuero común o federal, según sea el caso, que haya prevenido en el conocimiento de la causa; **VI.** Cuando el lugar de comisión del hecho punible sea desconocido, será competente el Órgano jurisdiccional del fuero común o federal, según sea el caso, de la circunscripción judicial dentro de cuyo territorio haya sido detenido el imputado, a menos que haya prevenido el Órgano jurisdiccional de la circunscripción judicial donde residía. Si, posteriormente, se descubre el lugar de comisión del hecho punible, continuará la causa el Órgano jurisdiccional de este último lugar; **VII.** Cuando el hecho punible haya iniciado su ejecución en un lugar y consumado en otro, el conocimiento corresponderá al Órgano jurisdiccional de cualquiera de los dos lugares, y **VIII.** Cuando el hecho punible haya comenzado su ejecución o sea cometido en territorio extranjero y se siga cometiendo o produzca sus efectos en territorio nacional, en términos de la legislación aplicable, será competencia del Órgano jurisdiccional federal.

¹⁸ **Artículo 20. Reglas de competencia.** Para determinar la competencia territorial de los Órganos jurisdiccionales federales o locales, según corresponda, se observarán las siguientes reglas: **I.** Los Órganos jurisdiccionales del fuero común tendrán competencia sobre los hechos punibles cometidos dentro de la circunscripción judicial en la que ejerzan sus funciones, conforme a la distribución y las disposiciones establecidas por su Ley Orgánica, o en su defecto, conforme a los acuerdos expedidos por el Consejo; **II.** Cuando el hecho punible sea del orden federal, conocerán los Órganos jurisdiccionales federales; **III.** Cuando el hecho punible sea del orden federal pero exista competencia concurrente, deberán conocer los Órganos jurisdiccionales del fuero común, en los términos que dispongan las leyes; **IV.** En caso de concurso de delitos, el Ministerio Público de la Federación podrá conocer de los delitos del fuero común que tengan conexidad con delitos federales cuando lo considere conveniente, asimismo los Órganos jurisdiccionales federales, en su caso, tendrán competencia para juzgarlos. Para la aplicación de sanciones y medidas de seguridad en delitos del fuero común, se atenderá a la legislación de su fuero de origen. En tanto la Federación no ejerza dicha facultad, las autoridades estatales estarán obligadas a asumir su competencia en términos de la fracción primera de este artículo; **V.** Cuando el hecho punible haya sido cometido en los límites de dos circunscripciones judiciales, será competente el Órgano jurisdiccional del fuero común o federal, según sea el caso, que haya prevenido en el conocimiento de la causa; **VI.** Cuando el lugar de comisión del hecho punible sea desconocido, será competente el Órgano jurisdiccional del fuero común o federal, según sea el caso, de la circunscripción judicial dentro de cuyo territorio haya sido detenido el imputado, a menos que haya prevenido el Órgano jurisdiccional de la circunscripción judicial donde residía. Si, posteriormente, se descubre el lugar de comisión del hecho punible, continuará la causa el Órgano jurisdiccional de este último lugar; **VII.** Cuando el hecho punible haya iniciado su ejecución en un lugar y consumado en otro, el conocimiento corresponderá al Órgano jurisdiccional de cualquiera de los dos lugares, y **VIII.** Cuando el hecho punible haya comenzado su ejecución o sea cometido en territorio extranjero y se siga cometiendo o produzca sus efectos en territorio nacional, en términos de la legislación aplicable, será competencia del Órgano jurisdiccional federal.

¹⁹ **Artículo 52. Disposiciones comunes.** Los actos procedimentales que deban ser resueltos por el Órgano jurisdiccional se llevarán a cabo mediante audiencias, salvo los casos de excepción que prevea este Código. Las cuestiones debatidas en una audiencia deberán ser resueltas en ella.

²⁰ **Artículo 67. Resoluciones judiciales.** La autoridad judicial pronunciará sus resoluciones en forma de sentencias y autos. Dictará sentencia para decidir en definitiva y poner término al procedimiento y autos en todos los demás casos. Las resoluciones judiciales deberán mencionar a la autoridad que resuelve, el lugar y la fecha en que se dictaron y demás requisitos que este Código prevea para cada caso. Los autos y resoluciones del Órgano jurisdiccional serán emitidos oralmente y surtirán sus efectos a más tardar al día siguiente. Deberán constar por escrito, después de su emisión oral, los siguientes: **I.** Las que resuelven sobre providencias precautorias; **II.** Las órdenes de aprehensión y comparecencia; **III.** La de control de la detención; **IV.** La de vinculación a proceso; **V.** La de medidas cautelares; **VI.** La de apertura a juicio; **VII.** Las que versen sobre sentencias definitivas de los procesos especiales y de juicio; **VIII.** Las de sobreseimiento, y **IX.** Las que autorizan técnicas de investigación con control judicial previo. En ningún caso, la resolución escrita deberá exceder el alcance de la emitida oralmente, surtirá sus efectos inmediatamente y deberá dictarse de forma inmediata a su emisión en forma oral, sin exceder de veinticuatro horas, salvo disposición que establezca otro plazo. Las resoluciones de los tribunales

SEGUNDO.- El Código Adjetivo Nacional en la materia, entre otras cosas, establece diversos medios de aceleración o descongestión del Sistema de Justicia Penal, entre los que se encuentra el procedimiento abreviado, el cual, por las razones ya expuestas en audiencia diversa, se desarrolló en observancia a lo dispuesto por los artículos 201²⁵ a 206²⁶ del dispositivo legal anotado, a ello debemos de agregar que este mecanismo de salida alterna es uno de esos mecanismos que el derecho Procesal Penal moderno nos pone a nuestro alcance para agilizar y hacer eficiente la administración de justicia penal, buscándose con ello también el descongestionamiento de los Tribunales, se puede definir esta figura jurídica como el juicio que se le hace a un imputado en donde se le impone una pena, por la comisión de un hecho de carácter penal, prescindiendo de la oralidad, la contradicción, la publicidad y la producción de pruebas, previo a la conformidad entre el Ministerio Público y los acusado, finalmente con el juicio abreviado el sistema penal expresa su acuerdo con la corriente de que el derecho penal debe ser la última respuesta que el Estado debe darle a los conflictos penales –derecho penal mínimo- y acoge la idea de que lo que se busca con el derecho procesal penal es la verdad consensuada y no la verdad real.

TERCERO.- El Agente del Ministerio Público formuló acusación en contra de ***** por el hecho tipificado como delito de **SECUESTRO EQUIPARADO** previsto y sancionado por el artículo 15 fracciones III y V de la Ley General para Prevenir y Sancionar los

colegiados se tomarán por mayoría de votos. En el caso de que un Juez o Magistrado no esté de acuerdo con la decisión adoptada por la mayoría, deberá emitir su voto particular y podrá hacerlo en la propia audiencia, expresando sucintamente su opinión y deberá formular dentro de los tres días siguientes la versión escrita de su voto para ser integrado al fallo mayoritario.

²¹ **Artículo 68. Congruencia y contenido de autos y sentencias.** Los autos y las sentencias deberán ser congruentes con la petición o acusación formulada y contendrán de manera concisa los antecedentes, los puntos a resolver y que estén debidamente fundados y motivados; deberán ser claros, concisos y evitarán formulismos innecesarios, privilegiando el esclarecimiento de los hechos.

²² **Artículo *66 bis.-** En el proceso penal acusatorio y adversarial, los Jueces y Magistrados podrán actuar sin asistencia de secretarios o testigos de asistencia, y en ese caso ellos tendrán fe pública para certificar el contenido de los actos que realicen y de las resoluciones que dicten, incluso cuando tales actos consten en registros informáticos, de audio, video, o se transcriban por escrito.

²³ **Artículo 67.-** Son Jueces de primera instancia los siguientes: I.- Civiles; II.- Penales; y III.- Mixtos. Para todos los efectos legales, se consideran jueces de primera instancia en materia penal a los jueces de garantía y los jueces de juicio oral.

²⁴ **Artículo 70.-** Corresponde a los Jueces mixtos de primera instancia conocer de todos los asuntos de la competencia de los Jueces de lo civil y de lo penal que se susciten en su distrito.

²⁵ **Artículo 201. Requisitos de procedencia y verificación del Juez.** Para autorizar el procedimiento abreviado, el Juez de control verificará en audiencia los siguientes requisitos: **I.** Que el Ministerio Público solicite el procedimiento, para lo cual se deberá formular la acusación y exponer los datos de prueba que la sustentan. La acusación deberá contener la enunciaci3n de los hechos que se atribuyen al acusado, su clasificaci3n jur3dica y grado de intervenci3n, as3 como las penas y el monto de reparaci3n del da3o; **II.** Que la v3ctima u ofendido no presente oposici3n. S3lo ser3 vinculante para el juez la oposici3n que se encuentre fundada, y **III.** Que el imputado: **a)** Reconozca estar debidamente informado de su derecho a un juicio oral y de los alcances del procedimiento abreviado; **b)** Expresamente renuncie al juicio oral; **c)** Consienta la aplicaci3n del procedimiento abreviado; **d)** Admita su responsabilidad por el delito que se le imputa; **e)** Acepte ser sentenciado con base en los medios de convicci3n que exponga el Ministerio P3blico al formular la acusaci3n.

²⁶ **Artículo 206. Sentencia.** Concluido el debate, el Juez de control emitir3 su fallo en la misma audiencia, para lo cual deber3 dar lectura y explicaci3n p3blica a la sentencia, dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, explicando de forma concisa los fundamentos y motivos que tom3 en consideraci3n. No podr3 imponerse una pena distinta o de mayor alcance a la que fue solicitada por el Ministerio P3blico y aceptada por el acusado. El juez deber3 fijar el monto de la reparaci3n del da3o, para lo cual deber3 expresar las razones para aceptar o rechazar las objeciones que en su caso haya formulado la v3ctima u ofendido.



PODER JUDICIAL

H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

UNA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PRONTA, GRATUITA Y HONESTA ES DIGNA DE ASPIRACIÓN SOCIAL;
A SU REALIZACIÓN USTED PUEDE Y DEBE COLABORAR

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS
JUZGADO ESPECIALIZADO DE CONTROL DEL ÚNICO DISTRITO JUDICIAL,
SEDE XOCHITEPEC, MORELOS
RAMÓN VILLANUEVA URIBE

Sentencia de procedimiento abreviado.

CARPETA TÉCNICA. JC/1598/2019.

delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 7 fracción I (acción e instantáneo), 8 (delitos dolosos o culposos), 9 (doloso) y 13 fracción II (autor material) del Código Penal Federal, en agravio de la víctima quien en vida respondiera a las iniciales ***** hecho perpetrado por el acusado en su calidad de **autor material**, en términos del numeral **13** fracción **II** del Código Penal Federal, basándose en hechos, que en virtud del procedimiento abreviado fueron admitidos por el hoy acusado.

El Agente del Ministerio Público formuló acusación en contra de ***** teniendo como hecho sustancial el siguiente:

*"...El pasado 26 de noviembre del año 2019, aproximadamente entre las 10:30 horas y las 23:00 horas, la víctima de iniciales ***** , fue privada de su libertad, desconociéndose hasta este momento el lugar de privación, posteriormente ese mismo día aproximadamente a las 23:00 horas, la familia de la víctima directa empieza a recibir llamadas de negociación, al número telefónico propiedad de la hija de la víctima de iniciales ***** , al número ***** , proveniente de la línea telefónica de la víctima directa con número ***** , exigiéndole el activo la cantidad de doscientos mil pesos, ya que tenían secuestrado a su señor padre y le daba 24 horas, para conseguir el dinero, al día siguiente 27 de noviembre de 2019 aproximadamente las 00:09 horas, la hija de la víctima recibe un mensaje vía WhatsApp proveniente del número de la víctima ***** , consistente en un audio de la voz, en el que se escucha la voz de la víctima directa ***** quien le dice, "que venda lo que tenga que vender, que tiene que entregar doscientos mil pesos, que venda su coche y que le dan 48 horas, enviándole una fotografía de su padre ***** , en la cual se observa amarrado de pies y manos a una cama y la cabeza tapada con trapo color blanco, en seguida recibe la víctima indirecta ***** , un segundo audio el cual es la voz de un masculino quien le dice "tienes 24 horas nada más, esto no es un juego o quieres que te mande un pedazo de él". Continúan las llamadas de negociación por la*

liberación de la víctima, los días 27 y 28 de noviembre del año 2019, en diversos horarios, por parte del activo con la familia de la víctima al número telefónico *****, registrándose dos números de origen ***** y *****, en el que continuaban con la exigencia de los \$200,000 pesos que de lo contrario le causarían daño, pactando la hija de la víctima *****, con el activo la cantidad de ciento setenta mil pesos, por la liberación de su padre hoy víctima, quien recibió indicaciones del activo del lugar del pago, realizando el pago de rescate en calle ***** del poblado de ***** del municipio de *****, *****, sin que la víctima de iniciales ***** fuera liberada. Por otra parte y derivado de los actos de investigación es que el día 02 de marzo de 2020, aproximadamente a las 15:50 horas, al constituirse el agente del ministerio público adscrito a la fiscalía especializada en combate al secuestro y extorsión, en calle ***** número ***** de la colonia ***** del municipio de *****, *****, acompañado por diversos elementos adscritos y comisionados a la misma fiscalía especializada y personal pericial de la fiscalía general del estado de Morelos, para llevar a cabo el desahogo de una diligencia de cateo, autorizada en la causa penal JC/1598/2019, correspondiente a la carpeta de investigación *****, que se instruye por el delito de secuestro, cometido en agravio de una víctima de nombre con iniciales ***** es que al momento de llamar a la puerta de dicho inmueble el agente del ministerio público, el acusado *****, es quien atiende al llamado desde el interior del inmueble, ostentándose como el que cuida el lugar, siendo el agente del ministerio público quien le hace del conocimiento el motivo de su presencia para realizar una diligencia de cateo, preguntando por el dueño o quien ahí viviera, respondiendo el acusado ***** "que no permitiría el acceso de nadie y que no daría el nombre de quien vive ahí", incluso el agente del ministerio público le da lectura al mandamiento judicial, explicándole que se trata de una investigación de secuestro y que se busca entre otras cosas a la víctima de iniciales *****, con o sin vida; siendo esta diligencia de carácter urgente, momento en el que el acusado ***** empuja la puerta cerrándola con fuerza, al tiempo que grita: ¡ que no, Ya le, dije que no van a entrar!, y por la conducta que mostró el acusado *****, siendo la de impedir el ingreso del personal, obstaculizando el desarrollo de la investigación de secuestro en la carpeta de investigación *****, relacionada en la búsqueda de la víctima de iniciales *****, y ante esta conducta desplegada y al oponer resistencia es que es



PODER JUDICIAL

H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

UNA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PRONTA, GRATUITA Y HONESTA ES DIGNA DE ASPIRACIÓN SOCIAL;
A SU REALIZACIÓN USTED PUEDE Y DEBE COLABORAR

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS
JUZGADO ESPECIALIZADO DE CONTROL DEL ÚNICO DISTRITO JUDICIAL,
SEDE XOCHITEPEC, MORELOS
RAMÓN VILLANUEVA URIBE

Sentencia de procedimiento abreviado.

CARPETA TÉCNICA. JC/1598/2019.

*asegurado en el interior del inmueble ubicado en calle ***** número ***** de la colonia ***** del municipio de ***** , ***** , a las 15:57 horas, asegurándole en su poder un equipo telefónico de la marca ***** , color ***** con una tarjeta SIM de la marca ***** con número de serie ***** , con número de IMEI ***** , así como una identificación ***** a nombre del acusado ***** . Por otra parte y del resultado del desahogo de la diligencia de cateo, es que en el interior del inmueble ubicado en calle ***** número ***** de la colonia ***** del municipio de ***** , ***** , se localizó y se realizó el levantamiento del cuerpo sin vida de la víctima de iniciales ***** , a las 22:55 horas, quien presentó como causa de muerte por asfixia por estrangulación, lugar en donde el acusado ***** , frecuentaba a los moradores del inmueble ubicado en calle ***** número ***** de la colonia ***** del municipio de ***** , ***** , por la relación de amistad que el acusado tenía hacia con ellos, así mismo tenía libre acceso al interior del inmueble antes descrito, y que el acusado ***** , el día que es localizado el cuerpo sin vida de la víctima directa de iniciales ***** , se encontraba como encargado del inmueble antes citado, esto es que llevó acabo el ocultamiento del cuerpo sin vida de la víctima de iniciales ***** ...(Sic.)”.*

CUARTO.- Asimismo el Agente del Ministerio Público para acreditar su dicho, de acuerdo a lo que establece el artículo 130²⁷, ya que a éste se le atribuye la carga de la prueba, invocó los antecedentes de prueba que obran en su carpeta de investigación.

En ese orden de ideas es de señalar que de los antecedentes de investigación que fueron aportados, son suficientes para este Juzgador, para tener por acreditados plenamente los elementos estructurales del delito de **SECUESTRO EQUIPARADO** previsto y sancionado por el artículo 15 fracciones III y V de la Ley General para Prevenir y Sancionar los delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos

²⁷ **Artículo 130. Carga de la prueba.** La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, conforme lo establezca el tipo penal.

7 fracción I (acción e instantáneo), 8 (delitos dolosos o culposos), 9 (doloso) y 13 fracción II (autor material) del Código Penal Federal.

QUINTO.- Por cuanto a la existencia del delito y responsabilidad penal del acusado en el mismo, es importante destacar que la adopción del sistema procesal penal acusatorio y oral, incorporada por la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, constituye una de las más trascendentales transformaciones en el ámbito procesal penal del país. El objetivo del legislador ordinario para acoger dicho sistema fue la de unificar la implementación de un sistema procesal en todo el país, sobre la base de un modelo en el que se reconozcan y protejan los derechos humanos de las personas que se ven involucradas en un problema de connotación jurídico penal.

Ahora bien, la regla de este sistema procesal es la solución de los conflictos jurídico-penales mediante el procedimiento ordinario, el cual se compone por diversas etapas secuenciales hasta llegar al juicio oral. En términos del contenido del Código Nacional de Procedimientos Penales, el procedimiento está dividido en tres etapas: preliminar o de investigación, intermedia o de preparación a juicio y de juicio oral.

De manera general, puede afirmarse que la primera etapa está compuesta por todos los actos procedimentales que permiten reunir los elementos necesarios para formular acusación contra una persona a fin de que sea sometida a juicio oral. Entre estos actos se ubica la obtención de datos primarios por parte del acusador, para estar en condiciones de darle a conocer a una persona que se ha iniciado una investigación en su contra y que se están recopilando las pruebas que le permitan llevarlo a juicio oral, lo cual estará bajo la supervisión de una autoridad judicial.

Posteriormente continúa la etapa intermedia en la que se fija la acusación y se delimita el objeto de lo que será el juicio oral, mediante la exclusión de hechos que se tengan por probados y el anuncio de las pruebas que se proponen desahogar. La última de



PODER JUDICIAL

H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

UNA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PRONTA, GRATUITA Y HONESTA ES DIGNA DE ASPIRACIÓN SOCIAL;
A SU REALIZACIÓN USTED PUEDE Y DEBE COLABORAR

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS
JUZGADO ESPECIALIZADO DE CONTROL DEL ÚNICO DISTRITO JUDICIAL,
SEDE XOCHITEPEC, MORELOS
RAMÓN VILLANUEVA URIBE

Sentencia de procedimiento abreviado.

CARPETA TÉCNICA. JC/1598/2019.

las etapas procesales es el desarrollo del juicio oral, en la que se desahogan todas las pruebas frente al tribunal de juicio oral y este termina por decidir la contienda judicial.

Ahora bien, esta trayectoria procesal del juicio oral, que constituye la regla general, no es la misma por la que transita el procedimiento abreviado. En efecto, el abreviado es un procedimiento especial que permite la terminación del proceso de manera anticipada. Lo que significa que en ningún caso tendrá que pasar por todas las etapas secuenciales del procedimiento ordinario de juicio oral.

Esta afirmación tiene sustento jurídico en el texto de la Constitución Federal, que en su artículo 20, apartado A, fracción VII, establece:

Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.

A. De los principios generales:

[...]

VII. Una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no exista oposición del inculpado, se podrá decretar su terminación anticipada en los supuestos y bajo las modalidades que determine la ley. Si el imputado reconoce ante la autoridad judicial, voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias, su participación en el delito y existen medios de convicción suficientes para corroborar la imputación, el juez citará a audiencia de sentencia. La ley establecerá los beneficios que se podrán otorgar al inculpado cuando acepte su responsabilidad; [...]

El precepto constitucional transcrito constituye el fundamento de las formas anticipadas de conclusión del proceso, entre las que se ubica el procedimiento especial abreviado, el cual procede bajo los supuestos y bajo las modalidades establecidas en las leyes secundarias; en el caso, en los artículos 201 a 207 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

A diferencia del procedimiento ordinario oral, una vez instruida la etapa preliminar, en la que el juez ya autorizó al

Ministerio Público que bajo su control iniciara una investigación contra el imputado, a quien previamente le decretó auto de vinculación a proceso y fijó el periodo que comprenderá la indagación sujeta a control judicial, se presenta un momento crucial en el proceso. El Ministerio Público tendrá que decidir si formula acusación contra el imputado y solicitar la apertura de la etapa intermedia o de preparación a juicio oral, que se debe instruir con estricto apego a las reglas procedimentales del procedimiento ordinario.

Pero también el acusador podrá, después de formular acusación, apartarse del procedimiento ordinario y optar por una vía que permita terminar el proceso de forma anticipada. Es aquí donde tiene lugar el procedimiento abreviado que, de acuerdo con la legislación procesal penal nacional, se tramita a solicitud del Ministerio Público o del imputado, en caso de que este último admita el delito que se le atribuye en la acusación y consienta la aplicación de este procedimiento; en tanto que el acusador coadyuvante no presente oposición fundada.

Lo anterior tiene reflejo en el artículo 201 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual a la letra establece lo siguiente:

"Artículo 201. Requisitos de procedencia y verificación del Juez.

Para autorizar el procedimiento abreviado, el Juez de control verificará en audiencia los siguientes requisitos:

I. *Que el Ministerio Público solicite el procedimiento, para lo cual se deberá formular la acusación y exponer los datos de prueba que la sustentan. La acusación deberá contener la enunciación de los hechos que se atribuyen al acusado, su clasificación jurídica y grado de intervención, así como las penas y el monto de reparación del daño;*

II. *Que la víctima u ofendido no presente oposición. Sólo será vinculante para el juez la oposición que se encuentre fundada, y*

III. *Que el imputado:*

a) *Reconozca estar debidamente informado de su derecho a un juicio oral y de los alcances del procedimiento abreviado;*



PODER JUDICIAL

H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

UNA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PRONTA, GRATUITA Y HONESTA ES DIGNA DE ASPIRACIÓN SOCIAL;
A SU REALIZACIÓN USTED PUEDE Y DEBE COLABORAR

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS
JUZGADO ESPECIALIZADO DE CONTROL DEL ÚNICO DISTRITO JUDICIAL,
SEDE XOCHITEPEC, MORELOS
RAMÓN VILLANUEVA URIBE

Sentencia de procedimiento abreviado.

CARPETA TÉCNICA. JC/1598/2019.

- b) Expresamente renuncie al juicio oral;*
- c) Consienta la aplicación del procedimiento abreviado;*
- d) Admita su responsabilidad por el delito que se le imputa;*
- e) Acepte ser sentenciado con base en los medios de convicción que exponga el Ministerio Público al formular la acusación (Sic)".*

De acuerdo con el precepto transcrito, existen tres elementos que necesariamente deben cumplirse para la tramitación del procedimiento especial abreviado, a solicitud del Ministerio Público o del imputado, estos son:

- ✓ Que el acusado admita ante la autoridad judicial el hecho que se le atribuye en el escrito de acusación;
- ✓ Que consienta la aplicación del procedimiento especial abreviado, y;
- ✓ Que el Ministerio Público o la víctima no presenten oposición fundada a la tramitación de dicho procedimiento.

Respecto del primero de los requisitos, es decir, que el acusado admita ante la autoridad judicial el hecho atribuido en el escrito de acusación, es importante hacer diversas precisiones.

De acuerdo con lo previsto en la fracción primero del artículo anteriormente transcrito la acusación del Ministerio Público debe ser presentada ante la autoridad judicial, y en la misma deben precisarse, entre otros elementos, los hechos que se atribuyen al imputado como responsable y los datos de prueba que lo sustenten.

Una vez hecho lo anterior el Juez de la causa debe ordenar su notificación a las partes, por lo que a través de dicha

notificación el imputado tendrá conocimiento preciso de la acusación que obra en su contra, especialmente, del hecho o hechos ilícitos que se le imputan. Así, con pleno conocimiento de la acusación en contra del acusado, a solicitud de éste o del Ministerio Público, podrá tramitarse el procedimiento especial abreviado, siempre y cuando el acusado admita ante la autoridad judicial el hecho que se le atribuye, bajo los términos ahí establecidos.

Ahora bien, para estar en posibilidad de determinar si la "aceptación" del inculpado sobre su participación en el delito puede ser considerada propiamente como una "confesión", primero es propicio establecer lo que debe entenderse por dicho concepto. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la "confesión" es la declaración del indiciado sobre hechos propios, que se produce voluntariamente, de manera espontánea y libre de toda coacción, misma que tendrá valor probatorio pleno sí cumple con los requisitos referidos, aunado a que no existan diversas pruebas en el proceso que la desvirtúen, haciéndola inverosímil.

Lo anterior ha sido reiterado en múltiples ocasiones en tesis emitidas por la autoridad antedíctame señalada, entre las que se encuentran las de rubros y textos siguientes:

"CONFESIÓN DEL INculpADO, VALORACIÓN DE LA. *Conforme a la técnica que rige la apreciación de las pruebas en el procedimiento penal, la confesión del imputado como reconocimiento de su propia culpabilidad derivada de hechos propios, tiene el valor de un indicio, y alcanza el rango de prueba plena cuando no está desvirtuada ni es inverosímil y si corroborada por otros elementos de convicción*²⁸."

"CONFESIÓN DEL ACUSADO. *Es verdad que tanto el derecho penal positivo (artículos 246 y 249 del Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal) como la doctrina, establecen que para que la prueba confesional tenga el carácter de plena es necesario, entre otros requisitos, que se produzca en forma espontánea, libre de toda coacción y que si hay elementos siquiera indiciarios que hagan presumir o por lo menos dudar de aquella espontaneidad y libertad, carece de validez la prueba; pero si*

²⁸ Tesis aislada publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 20, Segunda Parte, materia penal, p. 25. Precedentes: Amparo directo 759/70. 12 de agosto de 1970. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Manuel Rivera Silva. Séptima Época, Segunda Parte: Volumen 15, página 21. Amparo directo 2746/66. 20 de marzo de 1970. Cinco votos. Ponente: Ezequiel Burguete Farrera. Sexta Época, Segunda Parte: Volumen XXX, página 10. Amparo directo 3620/59. 3 de diciembre de 1959. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Luis Chico Goerne.



PODER JUDICIAL

H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

UNA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PRONTA, GRATUITA Y HONESTA ES DIGNA DE ASPIRACIÓN SOCIAL;
A SU REALIZACIÓN USTED PUEDE Y DEBE COLABORAR

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS
JUZGADO ESPECIALIZADO DE CONTROL DEL ÚNICO DISTRITO JUDICIAL,
SEDE XOCHITEPEC, MORELOS
RAMÓN VILLANUEVA URIBE

Sentencia de procedimiento abreviado.

CARPETA TÉCNICA. JC/1598/2019.

en el caso no hay elemento alguno que revele o haga sospechar que la confesión fue obtenida mediante promesas o subterfugios ni de que se haya empleado coacción en contra de los declarantes, es legal la condena que se apoye en la confesión rendida ante el Ministerio Público y ratificada ante el Juez²⁹”.

"DELITO CONTRA LA SALUD, COMPROBACIÓN DE, POR CONFESIÓN DEL ACUSADO. Si la confesión del quejoso en el sentido de haber adquirido la semilla del enervante cannabis activa, haberla sembrado y cultivado y haber realizado los distintos actos que tipifican las diferentes modalidades de la acción criminal, la hizo voluntariamente, de una manera espontánea y sin violencia ni coacción, y no existen en el proceso pruebas que la desvirtúen haciéndola inverosímil, resulta establecida la culpabilidad del quejoso y la comisión del delito a que se refiere la fracción II del artículo 194 en relación con el 193 del Código Penal Federal³⁰”.

Al respecto, es importante mencionar que en el Código Nacional de Procedimientos Penales no se encuentra contemplada la “confesión”, sino que se otorga al juzgador libre apreciación de la declaración del inculpado, sin que se le asigne una denominación específica. Lo que no es una omisión, sino que obedece a la incorporación de un sistema distinto de valoración probatoria, que abandona el contexto tasado de asignación de valor a ciertos medios de prueba, aplicable en el sistema procesal penal mixto/escrito. En el cual tanto el valor que se da a las pruebas como las condiciones o requisitos para su apreciación se encuentran preestablecidos en la norma jurídica, por lo que el juzgador tiene que ajustarse al contenido dispuesto en la Ley, quedando así su decisión limitada por el legislador

Para aclarar lo anterior, respecto a la diferencia jurídica que implicó la “confesión” conforme al sistema procesal penal tradicional –mixto/escrito– y el reconocimiento o admisión del hecho señalado en la ley como delito, acorde al sistema procesal penal acusatorio, resulta de gran utilidad hacer referencia a lo

²⁹ Tesis aislada publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo CXXIX, materia penal, p. 846. Precedentes: Amparo directo 1087/56. Por acuerdo de la Primera Sala, de fecha 8 de junio de 1953, no se menciona el nombre del promovente. 29 de septiembre de 1956. Unanimidad de cinco votos. Ponente: Agustín Mercado Alarcón. Amparo directo 1095/56. Por acuerdo de la Primera Sala, de fecha 8 de junio de 1953, no se menciona el nombre del promovente. 29 de septiembre de 1956. Unanimidad de cinco votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

³⁰ Tesis aislada publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo CXX, materia penal, p. 442. Precedente: Amparo penal directo 784/53. Por acuerdo de la Primera Sala, de fecha 8 de junio de 1953, no se menciona el nombre del promovente. 28 de abril de 1954. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Luis Chico Goerne. La publicación no menciona el nombre del ponente.

previsto en los artículos 207 y 287 del Código Federal de Procedimientos Penales, que regulan la confesión en el sistema procesal penal mixto/escrito, al establecer lo siguiente:

Artículo 207. *La confesión es la declaración voluntaria hecha por persona no menor de dieciocho años, en pleno uso de sus facultades mentales, rendida ante el Ministerio Público, el juez o tribunal de la causa, sobre hechos propios constitutivos del tipo delictivo materia de la imputación, emitida con las formalidades señaladas por el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: se admitirá en cualquier estado del procedimiento, hasta antes de dictar sentencia irrevocable.*

Artículo 287. *La confesión ante el Ministerio Público y ante el juez deberá reunir los siguientes requisitos:*

I. Que sea hecha por persona no menor de dieciocho años, en su contra, con pleno conocimiento, y sin coacción, ni violencia física o moral;

II. Que sea hecha ante el Ministerio Público o el tribunal de la causa, con la asistencia de su defensor o persona de su confianza, y que el inculpado esté debidamente informado del procedimiento y del proceso;

III. Que sea de hecho propio; y

IV. Que no existan datos que, a juicio del juez o tribunal, la hagan inverosímil.

No podrá consignarse a ninguna persona si existe como única prueba la confesión. La Policía Judicial podrá rendir informes pero no obtener confesiones; si lo hace, éstas carecerán de todo valor probatorio.

Las diligencias practicadas por agentes de la Policía Judicial Federal o local, tendrán valor de testimonios que deberán complementarse con otras diligencias de prueba que practique el Ministerio Público, para atenderse en el acto de la consignación, pero en ningún caso se podrán tomar como confesión lo asentado en aquéllas.

De los preceptos transcritos es posible advertir que la “confesión” es una declaración que debe ser emitida de manera voluntaria ante el Ministerio Público o la autoridad jurisdiccional, sobre hechos propios del declarante que constituyan el tipo delictivo materia de la acusación. Esta debe hacerse con pleno conocimiento del procedimiento y del proceso, sin coacción alguna y en presencia de su defensor.

Todo lo establecido hasta ahora, pone de manifiesto diversas y significativas diferencias entre la confesión y la aceptación de la



PODER JUDICIAL

H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

UNA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PRONTA, GRATUITA Y HONESTA ES DIGNA DE ASPIRACIÓN SOCIAL;
A SU REALIZACIÓN USTED PUEDE Y DEBE COLABORAR

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS
JUZGADO ESPECIALIZADO DE CONTROL DEL ÚNICO DISTRITO JUDICIAL,
SEDE XOCHITEPEC, MORELOS
RAMÓN VILLANUEVA URIBE

Sentencia de procedimiento abreviado.

CARPETA TÉCNICA. JC/1598/2019.

participación en el delito para efectos de iniciar un procedimiento abreviado. En efecto, tal como se señaló en párrafos precedentes, la "aceptación" en el procedimiento abreviado debe hacerse forzosamente ante la autoridad judicial bajo las reglas del sistema procesal penal acusatorio; mientras que la "confesión" puede hacerse ante dicha autoridad o ante el Ministerio Público, con las formalidades legales que regula el sistema procesal penal mixto/escrito.

Asimismo, la "aceptación" de la participación en el delito debe hacerse bajo los términos en los que lo haya especificado el Ministerio Público en su escrito de acusación, es decir, en las modalidades y con la calificación jurídica establecida en el escrito correspondiente. Aceptada en sus términos, no admite objeciones o variantes.

Ello, aunado al hecho de que la "confesión" y la "aceptación" de la participación en el delito se dan en niveles distintos; esto es, mientras que la "confesión" constituye un indicio que alcanza el rango de prueba plena cuando se encuentra corroborada por otros elementos de convicción; la "aceptación" del inculpado de su responsabilidad no constituye ni una prueba ni un dato de prueba; pues se trata del simple asentimiento de la acusación, en los términos en que es formulada por el acusador, que cumple con un requisito de procedencia para la tramitación del procedimiento especial abreviado, como se verá a continuación.

En efecto, la "confesión" del inculpado, como tal, no tiene otra finalidad que la de reconocer su participación en la comisión del delito imputado; mientras que según lo previsto por el artículo 201 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la "aceptación" voluntaria de la participación se hace con el objetivo específico de que se dé terminación anticipada al proceso penal, se tramite un procedimiento especial abreviado, y se disfrute de los

beneficios legales que procedan, tales como la obtención de penas menos estrictas.

En las relatadas circunstancias, resulta claro que la “aceptación” de la responsabilidad en los ilícitos atribuidos no constituye una prueba, que como tal solo puede serlo la “confesión” formal de los hechos por parte del acusado y que en su caso deberá rendirse en juicio oral, no en el procedimiento abreviado. Así, cuando el inculcado admite, ante autoridad judicial, su responsabilidad en la comisión del delito atribuido, en las modalidades y circunstancias expuestas por el Ministerio Público en el escrito de acusación, no está propiamente confesando su participación en la comisión de los hechos ilícitos que se le atribuyen, sino que acepta ser juzgado a partir de los antecedentes de investigación en que sustentó la acusación el Ministerio Público para dar procedencia al procedimiento abreviado, como forma anticipada de terminación del proceso penal acusatorio ordinario.

En el procedimiento ordinario tiene lugar la etapa intermedia en la que se depuran las pruebas y los hechos que serán materia de desahogo y cuestionamiento en el juicio oral, en un escenario de contradicción probatoria. En el procedimiento especial abreviado no existen las etapas de ofrecimiento y producción de prueba. La razón, porque se parte de condiciones distintas a las que son esencia de la contienda adversarial, al existir un acuerdo previo entre las partes que da como resultado la aquiescencia de la acusación a partir de los datos que son antecedentes de la investigación.

Lo anterior es posible apreciarlo en la regulación del procedimiento abreviado prevista en los artículos 201 a 207 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En éstos, se establece que dicho procedimiento especial se tramita a solicitud del Ministerio Público o del acusado, cuando este último admita su participación en el delito, consienta su aplicación y el Ministerio Público o la víctima u ofendido, en su caso, no presente oposición fundada.



PODER JUDICIAL

H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

UNA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PRONTA, GRATUITA Y HONESTA ES DIGNA DE ASPIRACIÓN SOCIAL;
A SU REALIZACIÓN USTED PUEDE Y DEBE COLABORAR

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS
JUZGADO ESPECIALIZADO DE CONTROL DEL ÚNICO DISTRITO JUDICIAL,
SEDE XOCHITEPEC, MORELOS
RAMÓN VILLANUEVA URIBE

Sentencia de procedimiento abreviado.

CARPETA TÉCNICA. JC/1598/2019.

La solicitud de apertura del procedimiento abreviado podrá hacerse por el Ministerio público en la misma audiencia en la que se determina la vinculación del imputado a proceso o posteriormente en la audiencia intermedia. Una vez realizada la solicitud, el Juez deberá resolver si es o no procedente la apertura del procedimiento abreviado. Para ello, la autoridad judicial deberá verificar si el imputado:

1. Consintió la tramitación del procedimiento abreviado de forma libre, voluntaria e informada, con la asistencia de su defensor;
2. Ha tenido conocimiento del derecho a un juicio oral, pero renuncie al mismo y acepte ser juzgado con base en los antecedentes recabados en la investigación;
3. Comprenda los términos y las consecuencias que le implica la aceptación del acuerdo con el acusador; y
4. Acepte los hechos materia de la acusación, de una manera inequívoca, libre y espontánea.

El juez de control aceptará la solicitud de procedimiento abreviado cuando se actualicen los requisitos de procedencia anteriores y existan medios de convicción suficientes que corroboren la acusación. Una vez acordada la procedencia del procedimiento especial, el juzgador abrirá el debate en el que el Ministerio Público expondrá la acusación sustentada en las actuaciones y diligencias realizadas durante la investigación, y los demás intervinientes podrán hacer uso de la palabra.

Terminado el debate, de conformidad con la legislación procesal penal, el juez de control emitirá su fallo respecto a la culpabilidad o absolución del inculcado en la misma audiencia, con lo que se le dará fin al procedimiento especial abreviado. En

caso de dictar un fallo condenatorio, el inculpado será acreedor del beneficio de la reducción de la pena.

Ahora bien, de lo expuesto hasta el momento, es posible afirmar que, en el procedimiento abreviado, es el acusado quien, con la asistencia jurídica de su defensor, acepta totalmente los hechos materia de la acusación; y, por tanto, renuncia al derecho a tener un juicio oral, en el que pueda ejercer el derecho de contradicción probatoria. Así, el acusado acepta que sea juzgado bajo las reglas procesales especiales que rigen el procedimiento de terminación anticipada del proceso, que tiene como base su aceptación de culpabilidad respecto del delito materia de la acusación.

A partir de las premisas enunciadas, queda claro que la apertura del procedimiento abreviado tiene una consecuencia jurídica trascendental, porque en la posición en la que se coloca voluntariamente el acusado, debidamente asistido jurídicamente por un defensor licenciado en derecho, e informado sobre el alcance y consecuencias jurídicas de aceptar la acusación en los términos en que se formula por la fiscalía o Ministerio Público, se excluye la aplicación del principio de contradicción probatoria, reconocido en el artículo 20 de la Constitución Federal. Ello, porque ya no estará en debate demostrar la comisión del hecho delictivo ni la culpabilidad del acusado, mediante elementos prueba; pues las partes convienen en tener estos presupuestos como hechos probados a partir de los antecedentes de investigación en los que se sustenta la acusación, con la finalidad de que la autoridad judicial esté en condiciones de dictar sentencia.

Cabe precisar que la aceptación de culpabilidad por el acusado en el procedimiento especial abreviado no es gratuita, sino que deriva de un juicio de ponderación de los elementos de defensa con los que se cuenta para hacer frente a la acusación. Entonces, ante un grado óptimo de probabilidad de que el juicio oral concluya con el dictado de una sentencia condenatoria, con la asesoría jurídica de su defensor, el acusado decide voluntariamente aceptar su participación en el delito, mediante la



PODER JUDICIAL

H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

UNA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PRONTA, GRATUITA Y HONESTA ES DIGNA DE ASPIRACIÓN SOCIAL;
A SU REALIZACIÓN USTED PUEDE Y DEBE COLABORAR

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS
JUZGADO ESPECIALIZADO DE CONTROL DEL ÚNICO DISTRITO JUDICIAL,
SEDE XOCHITEPEC, MORELOS
RAMÓN VILLANUEVA URIBE

Sentencia de procedimiento abreviado.

CARPETA TÉCNICA. JC/1598/2019.

admisión de la acusación, así como los hechos en que ésta se sustenta, con la finalidad de que sea procedente el mecanismo anticipado de conclusión del proceso, a cambio de tener un procedimiento breve y con la posibilidad de obtener sanciones de menor intensidad.

En este escenario procedimental, que parte de tener por admitidos los hechos materia de la acusación, no existe una etapa de presentación y desahogo de pruebas ante el juez. Lo que sí sucede en términos de los artículos 201 al 207 del Código Nacional de Procedimientos Penales, como ya se mencionó, es que una vez que el juez acepta la apertura del procedimiento abreviado, mediante la aplicación de un test estricto de verificación de presupuestos, después de constatar que se cumplen los presupuestos mencionados, en la audiencia respectiva se le otorga la palabra al Ministerio Público para que exponga la acusación, además de mencionar las actuaciones y diligencias de la investigación que la fundamentan.

Lo anterior implica que las partes prevén la posibilidad de conciliar en la aceptación de los hechos que sustentan la acusación, a partir de los medios de convicción que ha logrado reunir el Ministerio Público en la etapa de investigación, con independencia de que aún no hayan obtenido el rango de prueba, por no haberse desahogado en juicio oral; sin embargo, se aceptan como elementos de convicción suficientes para corroborar la acusación. Y es a través del acuerdo que tiene el acusador con el acusado, sobre la aceptación de los hechos materia de la imputación y del procedimiento abreviado, como se solicita que se dicte la sentencia respectiva.

Ahora bien, este juzgador no pasa desapercibido el hecho de que el artículo 20, apartado A, fracción VII, de la Constitución Federal, establece que se puede decretar la terminación anticipada del proceso penal, si el imputado reconoce su

participación en el delito y si “existen medios de convicción suficientes para corroborar la imputación”. Sin embargo, la locución “medios de convicción suficientes” no puede confundirse, interpretarse o asignarle como sentido que deba realizarse un ejercicio de valoración probatoria por parte de este juzgador para tener por demostrada la acusación formulada por el Ministerio Público.

Ello es así, porque la labor del juez de control se constriñe a determinar si la acusación del imputado contiene lógica argumentativa, a partir de corroborar que haya suficientes medios de convicción que la sustenten, es decir, que la aceptación del acusado de su participación en el delito no sea el único dato de prueba, sino que se encuentra relacionada con otros datos que le dan congruencia a las razones de la acusación. De no considerarse así, no tendría sentido contar con un procedimiento especial abreviado, pues éste se convertiría en un juicio oral un tanto más simplificado, otorgándole la misma carga al juzgador de valorar los datos de prueba para comprobar la acusación y premiando al imputado con el beneficio de penas disminuidas.

La posición del juzgador en el procedimiento abreviado no es otra que figurar como un ente intermedio, que funge como órgano de control para que se respete el debido proceso y no se vulneren los derechos procesales de las partes. En esta posición, al juez de control le corresponde verificar que efectivamente se actualicen las condiciones presupuestales para la procedencia de la resolución anticipada de la controversia; es decir, limitarse a analizar la congruencia, idoneidad, pertinencia y suficiencia de los medios de convicción invocados por el Ministerio Público en la acusación.

En ese sentido, en el supuesto que de que no existan medios de convicción suficientes para corroborar la acusación; es decir, que la acusación no tenga sustento lógico en otros datos diversos a la aceptación del acusado de haber participado en la comisión del delito, el juzgador estará en posibilidad de rechazar la tramitación del procedimiento especial abreviado. Sin que lo



PODER JUDICIAL

H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

UNA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PRONTA, GRATUITA Y HONESTA ES DIGNA DE ASPIRACIÓN SOCIAL;
A SU REALIZACIÓN USTED PUEDE Y DEBE COLABORAR

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS
JUZGADO ESPECIALIZADO DE CONTROL DEL ÚNICO DISTRITO JUDICIAL,
SEDE XOCHITEPEC, MORELOS
RAMÓN VILLANUEVA URIBE

Sentencia de procedimiento abreviado.

CARPETA TÉCNICA. JC/1598/2019.

anterior implique que el resultado dependa de la valoración que la autoridad judicial deba realizar de los medios de convicción sustento de la acusación, a fin de declarar el acreditamiento del delito y afirmar la responsabilidad penal del acusado.

En efecto, ante ello prevalece la aceptación de común acuerdo con el acusado en el sentido de que se juzgue con los antecedentes recabados durante la investigación, los que deberán constituir los medios de convicción para corroborar la acusación. Elementos que tendrán que ser suficientes para tal efecto, pues es evidente que no podrá admitirse la apertura de un procedimiento abreviado sustentando la acusación únicamente con la aceptación de culpabilidad del acusado.

Consecuentemente, la decisión sobre la procedencia del procedimiento abreviado no depende del ejercicio de valoración de los medios de convicción con los que el Ministerio Público sustenta la acusación, para afirmar el acreditamiento del delito y la demostración de culpabilidad del acusado. Es decir, en este procedimiento el juez de control no tiene por qué realizar un juicio de contraste para ponderar el valor probatorio de cada elemento y, a partir de este resultado, formarse convicción sobre la culpabilidad o inocencia del sentenciado. Ello está fuera de debate, porque así lo convinieron las partes; pues de no ser así, carecería de sentido la previsión del procedimiento abreviado como medio anticipado de solución de la controversia jurídico penal.

Así, la frase "existen medios de convicción suficientes para corroborar la imputación", contenida en el artículo 20, apartado A, fracción VII, de la Constitución Federal, no deberá entenderse como otra cosa que la obligación del juzgador de revisar la congruencia, idoneidad, pertinencia y suficiencia de los medios de convicción reseñados por el Ministerio Público para sustentar la acusación, como uno de los requisitos previos a la admisión de la

forma de terminación anticipada del proceso penal acusatorio. De manera que, en caso de existir una inconsistencia sustancial de estos datos de prueba, el juzgador podrá rechazar la tramitación del procedimiento abreviado al no cumplirse con los requisitos necesarios para su apertura, lo cual depende de la eficacia y coherencia en la formulación de la acusación, y no de la valoración de los elementos de convicción para efecto de acreditar los elementos del delito atribuido y la responsabilidad penal del inculpado en su comisión.

Máxime que, en el procedimiento abreviado, para efecto del dictado de una sentencia, no puede exigirse que el Ministerio Público haya demostrado plenamente la existencia del delito y la culpabilidad del acusado. Precisamente porque los elementos que pudieran ser eficaces para tal efecto, en su caso, serían materia de incorporación como prueba en audiencia de juicio oral. Lo que constriñe la actuación del juzgador, para que al dictar la sentencia derivada de un procedimiento especial abreviado únicamente a revisar la congruencia, idoneidad, pertinencia y suficiencia de los medios de convicción que sustenta la acusación para corroborar la imputación que ha sido aceptada por el acusado.

No obsta a todo lo anterior que el primer párrafo del artículo 20 de la Constitución Federal establezca que el proceso penal acusatorio y oral se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, y que dichos principios son observables en las audiencias preliminares al juicio, en términos de la fracción X del precepto citado. Lo cual pareciera indicar que dichos principios son igualmente aplicables al procedimiento especial abreviado. Sin embargo, las audiencias preliminares que señala la norma constitucional se refieren a las que se desahogan en las dos etapas previas al juicio oral, esto es, las de investigación e intermedia.

En efecto, tal como se estableció en párrafos precedentes, en la etapa de investigación se desarrollarán los actos procedimentales que permitan reunir los elementos necesarios para formular acusación en contra de una persona, y será en la etapa



PODER JUDICIAL

H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

UNA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PRONTA, GRATUITA Y HONESTA ES DIGNA DE ASPIRACIÓN SOCIAL;
A SU REALIZACIÓN USTED PUEDE Y DEBE COLABORAR

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS
JUZGADO ESPECIALIZADO DE CONTROL DEL ÚNICO DISTRITO JUDICIAL,
SEDE XOCHITEPEC, MORELOS
RAMÓN VILLANUEVA URIBE

Sentencia de procedimiento abreviado.

CARPETA TÉCNICA. JC/1598/2019.

intermedia cuando la fiscalía o el Ministerio Público fijen dicha acusación, delimitando para ello los datos de prueba que la sustenten. En el entendido de que esos datos de prueba serán materia de incorporación durante el juicio oral, para constituir auténticos medios probatorios que podrán ser objeto de contradicción y finalmente valorados por el juzgador para el efecto de dictar sentencia condenatoria o absolutoria al acusado.

Sin embargo, dicha circunstancia no sucede cuando se opta por un procedimiento penal abreviado, en donde el acusado renuncia al derecho a un juicio oral y acepta la acusación en los términos ahí establecidos, lo cual torna a los medios de convicción expuestos en dicha acusación en una serie de acuerdos de hechos aceptados como ciertos por el acusado para demostrar su participación en el delito, con el objetivo de acceder a los beneficios previstos por la ley. Ello, ante el grado óptimo de probabilidad que de continuar con el procedimiento ordinario el juicio oral concluya con el dictado de una sentencia condenatoria, por los mismos hechos que son materia de acusación en el procedimiento abreviado, pero ya sin derecho a la reducción de las penas que le corresponderían aplicar.

En ese sentido, en el procedimiento especial abreviado el inculcado renuncia al principio de contradicción y a la consecuente valoración probatoria por parte del juzgador, pues los medios de convicción contenidos en la acusación ya constituyen hechos aceptados. Cuestión que no rompe con lo previsto en el artículo 20, párrafo primero y fracción X, de la Constitución Federal, respecto de la observancia de los principios aplicables al juicio oral y las audiencias preliminares a éste. El procedimiento abreviado no se desarrolla dentro de estas etapas, sino que adopta un camino diverso hacia la terminación anticipada del proceso penal, en la que los medios de convicción contenidos en la acusación ya fueron aceptados por el acusado, debidamente informado de las consecuencias del procedimiento y asistido jurídicamente por un

defensor licenciado en derecho, con plena renuncia al principio de contradicción probatoria. Lo que da lugar a que el juzgador dicte la sentencia correspondiente y fije las sanciones penales respectivas.

Aunado a lo anterior, es importante precisar que previo a presentarse la solicitud de apertura al procedimiento abreviado, es necesario que se haya dictado la vinculación a proceso contra el imputado. Lo cual implica que previamente un juez de control ya realizó el estudio de los datos de prueba que corroboran que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, así como un análisis de las excluyentes del delito, de la prescripción y de cualquier causa de extinción de la acción penal.

Así, es posible afirmar que el análisis jurisdiccional para determinar si los medios de convicción reunidos por el Ministerio Público sustentan la acusación, no se realiza por primera vez al estudiar la procedencia para la apertura del procedimiento abreviado, sino que dicho estudio ya fue realizado por el juez de control en un momento previo para dictar el auto de vinculación a proceso. En efecto, al determinar la procedencia del procedimiento abreviado, el juzgador suma a lo ya estudiado en el auto de vinculación, el análisis de la aceptación del imputado de su participación en el delito, así como, en su caso, las posibles modificaciones de la acusación o la pena que se solicita imponer.

En este orden de ideas, es posible concluir que en el procedimiento abreviado en realidad no se está haciendo por segunda vez un estudio para determinar si los medios de convicción son suficientes para corroborar la imputación, pues ello se analizó por un juez de control al dictar el auto de vinculación a proceso; sino que se debe verificar si aunado a ello se cumplen con los demás requisitos necesarios para la tramitación de dicho procedimiento y, en su caso, analizar las modificaciones a la acusación o a la pena solicitada.



PODER JUDICIAL

H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

UNA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PRONTA, GRATUITA Y HONESTA ES DIGNA DE ASPIRACIÓN SOCIAL;
A SU REALIZACIÓN USTED PUEDE Y DEBE COLABORAR

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS
JUZGADO ESPECIALIZADO DE CONTROL DEL ÚNICO DISTRITO JUDICIAL,
SEDE XOCHITEPEC, MORELOS
RAMÓN VILLANUEVA URIBE

Sentencia de procedimiento abreviado.

CARPETA TÉCNICA. JC/1598/2019.

Por lo tanto, conforme a las consideraciones anteriores, resulta claro que en un juicio de amparo directo derivado de un procedimiento especial abreviado, sólo podrá ser objeto de cuestionamiento la violación al cumplimiento de los presupuestos jurídicos fundamentales para la procedencia de esa forma de terminación anticipada del proceso penal acusatorio; lo cual comprende el análisis la congruencia, idoneidad, pertinencia y suficiencia de los medios de convicción invocados por el Ministerio Público en la acusación. Así como, de ser el caso, la imposición de penas que sea contraria a la ley, distintas o mayores a las solicitadas por el Ministerio Público y aceptadas por el acusado, además la fijación del monto de la reparación del daño.

En este sentido en un procedimiento especial abreviado no están a debate, tanto la acreditación del delito como de la responsabilidad del acusado en su comisión, debido a la aceptación del acusado de ser juzgado con base en los medios de convicción que sustentan la acusación, dichos elementos no admiten contradicción en sede judicial; precisamente, porque son resultado del convenio asumido por las partes en un caso en que el acusado y su defensor concluyen que no tienen forma de revertir los elementos que sustentan la acusación.

Es por ello por lo que el acusado acepta su participación en la comisión del delito por el que se le acusa, ante el juez de control, a cambio de que a través de un procedimiento que permita la terminación anticipada del proceso se le dicte una sentencia con penas inferiores a las que pudieran imponérsele como resultado de la tramitación del procedimiento ordinario de juicio oral.

De no considerarse así, de ninguna manera existirá firmeza en lo acordado con el acusado, respecto a la aceptación de su participación en el delito a partir de los datos de prueba recabados durante la investigación. Y menos aún, seguridad jurídica para la víctima u ofendido del delito, quien espera que, de

acuerdo con el daño inicialmente aceptado por el acusado, obtenga una reparación proporcional a la afectación que le generó la comisión del delito.

Lo anterior, con la precisión de que el hecho de que el juzgador esté en posibilidad de dictar una sentencia absolutoria, conforme lo establece la legislación procesal analizada en la presente ejecutoria, de ninguna manera implica que el resultado dependa de la valoración que realice de los medios de convicción destacados por el acusador, a fin de determinar si efectivamente se acredita el delito y se demuestra la culpabilidad del acusado. Es decir, si bien el juzgador puede dictar sentencia absolutoria como resultado de un procedimiento abreviado, la posibilidad de hacerlo está extremadamente limitada, porque la decisión no depende del ejercicio de valoración de los medios de convicción con los que el Ministerio Público sustentó la acusación para afirmar el acreditamiento del delito y la demostración de culpabilidad de la persona sometida al procedimiento, ni de la falta de cumplimiento a los requisitos de procedencia de la propia forma de terminación anticipada del proceso penal acusatorio.

En el procedimiento abreviado el juzgador no tiene por qué realizar un juicio de contraste para ponderar el valor probatorio de cada elemento, a efecto de decidir si existe el delito y formarse convicción sobre la culpabilidad o inocencia del sentenciado. Ello está fuera de debate, porque así lo convinieron las partes; de no ser así, entonces carecería de sentido la previsión del procedimiento abreviado como medio anticipado de solución de la controversia jurídico penal.

Así, la posibilidad de dictar una sentencia absolutoria como resultado de un procedimiento abreviado, no tiene relación con la actualización de los elementos de procedencia de dicha forma anticipada de terminación del proceso, entre los que se encuentra la existencia de la solicitud, la ausencia o vicios en la información hacia el acusado de la renuncia a juicio oral y de los alcances del procedimiento abreviado, el consentimiento del acusado a la aplicación dicho procedimiento y reconocimiento voluntario de



PODER JUDICIAL

H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS
JUZGADO ESPECIALIZADO DE CONTROL DEL ÚNICO DISTRITO JUDICIAL,
SEDE XOCHITEPEC, MORELOS
RAMÓN VILLANUEVA URIBE

Sentencia de procedimiento abreviado.

CARPETA TÉCNICA. JC/1598/2019.

haber participado en el delito y que sea sentenciado con base en los medios de convicción en los que el Ministerio Público sustente la acusación, entre otros.

En otras palabras, la posibilidad de dictar sentencia absolutoria derivado de un procedimiento acusatorio, como se ha precisado, se restringe a situaciones extremadamente excepcionales, que deberán ser materia de análisis individualizado en cada caso concreto

Desde la anterior perspectiva de interpretación en el procedimiento abreviado al juzgador le corresponde, previo a dictar sentencia, verificar que efectivamente se actualicen las condiciones presupuestales para la procedencia de la resolución anticipada de la controversia, entre los que se comprende revisar la congruencia, idoneidad, pertinencia y suficiencia de los medios de convicción reseñados por el Ministerio Público para sustentar la acusación.

Así, al margen de importancia que tiene el principio de acusación y carga de la prueba para la parte acusadora en el sistema procesal penal acusatorio; en el procedimiento abreviado, para efecto del dictado de una sentencia, no puede exigirse que el Ministerio Público haya demostrado plenamente la existencia del delito y la culpabilidad del acusado. Precisamente porque los elementos que pudieran ser eficaces para tal efecto, en su caso, serían materia de incorporación como prueba en audiencia de juicio oral. Lo que constriñe la actuación del juzgador, al dictar la sentencia derivada de un procedimiento especial abreviado, únicamente para destacar el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad del procedimiento, como base para dictar sentencia condenatoria contra el acusado e imponer las sanciones aplicables conforme a la reducción solicitada por el órgano acusador en términos de la ley procesal. Lo que excluye la posibilidad de que el juzgador realice un análisis exhaustivo de los

UNA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PRONTA, GRATUITA Y HONESTA ES DIGNA DE ASPIRACIÓN SOCIAL;
A SU REALIZACIÓN USTED PUEDE Y DEBE COLABORAR

medios de convicción que sustenta la acusación –aceptada por el acusado en rechazo al amparo de los principios de contradicción probatoria y presunción de inocencia, en la vertiente de estándar de prueba–, para determinar la existencia del delito y de la culpabilidad del acusado a partir de prueba plena y la exclusión de toda duda razonable.

En síntesis, como se ha dicho, los medios de convicción en los que se sustenta la acusación en un procedimiento abreviado derivan de hechos que han sido aceptados voluntariamente por el acusado y no admiten contradicción en sede judicial; precisamente, porque son resultado del convenio asumido por las partes en un caso en que el acusado, con la debida asistencia jurídica y participación activa de su defensor, concluyen que no tienen forma de revertir los elementos que sustentan la acusación. Entonces, el acusado se declara culpable ante el juez del control y admite su responsabilidad penal en la comisión del delito por el que se le acusa, a cambio de que a través de un procedimiento que permita la terminación anticipada del proceso se le dicte una sentencia con penas inferiores a las que pudieran imponérsele como resultado de la tramitación del procedimiento ordinario de juicio oral.

La procedencia del procedimiento abreviado, como forma de terminación anticipada del proceso penal acusatorio, en todos los casos está condicionada a que el juez de control verifique, previo a la admisión de la solicitud, el cumplimiento de los presupuestos siguientes:

- a) El Ministerio Público o el acusado hayan solicitado la tramitación del procedimiento abreviado, a partir del dictado del auto de vinculación a proceso y hasta la audiencia intermedia.
 - b) El Ministerio Público o la víctima u ofendido, según corresponda, no presenten oposición fundada. Entendiéndose por oposición fundada, entre otras, cuando se haya efectuado una clasificación jurídica de
-



PODER JUDICIAL

H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

UNA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PRONTA, GRATUITA Y HONESTA ES DIGNA DE ASPIRACIÓN SOCIAL;
A SU REALIZACIÓN USTED PUEDE Y DEBE COLABORAR

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS
JUZGADO ESPECIALIZADO DE CONTROL DEL ÚNICO DISTRITO JUDICIAL,
SEDE XOCHITEPEC, MORELOS
RAMÓN VILLANUEVA URIBE

Sentencia de procedimiento abreviado.

CARPETA TÉCNICA. JC/1598/2019.

los hechos, atribuido una forma de participación o señalado circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal distintas a la sostenida por el Ministerio Público en su acusación y como consecuencia de ello haya una modificación sustancial de la pena.

c) El imputado, con la debida asistencia jurídica de un defensor que tenga el carácter de licenciado en Derecho, ante la autoridad judicial realice lo siguiente:

- Exprese su conformidad al procedimiento abreviado en forma libre, voluntaria e informada.
- Conozca su derecho a exigir un juicio oral y renuncie voluntariamente a él.
- Reconozca, voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias, su participación en el delito. Lo que implica que acepte los hechos materia de la acusación en forma inequívoca y de manera libre y espontánea.
- Acepte ser juzgado con base en los antecedentes recabados en la investigación.
- Entienda los términos del acuerdo y las consecuencias que éste pudiera implicarle.

d) Existan medios de convicción suficientes para corroborar la imputación, que corresponden a elementos que se desprendan de los registros contenidos en la carpeta de investigación.

Ahora bien, en caso de que los citados presupuestos jurídicos no se satisfagan plenamente el juez de control rechazará la

solicitud de apertura al procedimiento abreviado, tener por no formulada la acusación realizada exprofeso para la tramitación de dicho procedimiento y continuará con el trámite del procedimiento ordinario del proceso penal acusatorio. Además, el juzgador dispondrá que todos los antecedentes relativos al planteamiento, discusión y resolución de la solicitud del procedimiento abreviado sean eliminados del registro, los cuales no podrán ser utilizados en etapas posteriores del procedimiento en contra del acusado.

La anterior precisión implica que únicamente si todos los presupuestos jurídicos enunciados están plenamente satisfechos, entre ellos que se constate previamente que existen medios de convicción suficientes para corroborar la imputación, entonces el juez de control admitirá la apertura del procedimiento abreviado. Luego, en la audiencia respectiva escuchará a las partes y procederá a emitir el fallo respectivo, al cual deberá dar lectura y explicación pública a la sentencia, dentro de un plazo no mayor a cuarenta y ocho horas, en la que explicará en forma concisa los fundamentos y motivos que consideró, así como impondrá las penas aplicables conforme a la ley, sin que puedan ser distintas o mayores a las solicitadas por el Ministerio Público.

En este orden de ideas y acorde al análisis anteriormente realizado es innecesario realizar el estudio sobre la acreditación del delito materia de acusación y la responsabilidad del acusado en el mismo, por lo que se tienen por acreditados ambos supuestos jurídicos.

Por todo lo anterior, este Juez de Control para establecer un **JUICIO DE TIPICIDAD**, es decir, verificar si los hechos criminosos se adecuan a la descripción típica contenida en la ley, se concluye que en el caso se encuentran acreditados los elementos del delito de **SECUESTRO EQUIPARADO**, materia de la investigación, pues mediante el análisis de los medios convictivos aportados, se observa que: ***“...El pasado 26 de noviembre del año 2019, aproximadamente entre las 10:30 horas y las 23:00 horas, la víctima de iniciales ***** , fue privada de su libertad, desconociéndose hasta este momento el lugar de privación, posteriormente ese***



PODER JUDICIAL

H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

UNA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PRONTA, GRATUITA Y HONESTA ES DIGNA DE ASPIRACIÓN SOCIAL;
A SU REALIZACIÓN USTED PUEDE Y DEBE COLABORAR

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS
JUZGADO ESPECIALIZADO DE CONTROL DEL ÚNICO DISTRITO JUDICIAL,
SEDE XOCHITEPEC, MORELOS
RAMÓN VILLANUEVA URIBE

Sentencia de procedimiento abreviado.

CARPETA TÉCNICA. JC/1598/2019.

mismo día aproximadamente a las 23:00 horas, la familia de la víctima directa empieza a recibir llamadas de negociación, al número telefónico propiedad de la hija de la víctima de iniciales ***** , al número ***** , proveniente de la línea telefónica de la víctima directa con número ***** , exigiéndole el activo la cantidad de doscientos mil pesos, ya que tenían secuestrado a su señor padre y le daba 24 horas, para conseguir el dinero, al día siguiente 27 de noviembre de 2019 aproximadamente las 00:09 horas, la hija de la víctima recibe un mensaje vía WhatsApp proveniente del número de la víctima ***** , consistente en un audio de la voz, en el que se escucha la voz de la víctima directa ***** quien le dice, "que venda lo que tenga que vender, que tiene que entregar doscientos mil pesos, que venda su coche y que le dan 48 horas, enviándole una fotografía de su padre ***** , en la cual se observa amarrado de pies y manos a una cama y la cabeza tapada con trapo color blanco, en seguida recibe la víctima indirecta ***** , un segundo audio el cual es la voz de un masculino quien le dice "tienes 24 horas nada más, esto no es un juego o quieres que te mande un pedazo de él". Continúan las llamadas de negociación por la liberación de la víctima, los días 27 y 28 de noviembre del año 2019, en diversos horarios, por parte del activo con la familia de la víctima al número telefónico ***** , registrándose dos números de origen ***** y ***** , en el que continuaban con la exigencia de los \$200,000 pesos que de lo contrario le causarían daño, pactando la hija de la víctima ***** , con el activo la cantidad de ciento setenta mil pesos, por la liberación de su padre hoy víctima , quien recibió indicaciones del activo del lugar del pago, realizando el pago de rescate en calle ***** del poblado de ***** del municipio de ***** , ***** , sin que la víctima de iniciales ***** fuera liberada. Por otra parte y derivado de los actos de investigación es que el día 02 de marzo de 2020, aproximadamente a las 15:50 horas, al constituirse el agente del ministerio público adscrito a la fiscalía especializada en combate al secuestro y extorsión, en calle ***** número ***** de la colonia ***** del municipio de

***** , *****; acompañado por diversos elementos adscritos y comisionados a la misma fiscalía especializada y personal pericial de la fiscalía general del estado de Morelos, para llevar a cabo el desahogo de una diligencia de cateo, autorizada en la causa penal JC/1598/2019, correspondiente a la carpeta de investigación ***** , que se instruye por el delito de secuestro, cometido en agravio de una víctima de nombre con iniciales ***** es que al momento de llamar a la puerta de dicho inmueble el agente del ministerio público, el acusado ***** , es quien atiende al llamado desde el interior del inmueble, ostentándose como el que cuida el lugar, siendo el agente del ministerio público quien le hace del conocimiento el motivo de su presencia para realizar una diligencia de cateo, preguntando por el dueño o quien ahí viviera, respondiendo el acusado ***** "que no permitiría el acceso de nadie y que no daría el nombre de quien vive ahí", incluso el agente del ministerio público le da lectura al mandamiento judicial, explicándole que se trata de una investigación de secuestro y que se busca entre otras cosas a la víctima de iniciales ***** , con o sin vida; siendo esta diligencia de carácter urgente, momento en el que el acusado ***** empuja la puerta cerrándola con fuerza, al tiempo que grita: ¡ que no, Ya le dije que no van a entrar!, y por la conducta que mostró el acusado ***** , siendo la de impedir el ingreso del personal, obstaculizando el desarrollo de la investigación de secuestro en la carpeta de investigación ***** , relacionada en la búsqueda de la víctima de iniciales ***** , y ante esta conducta desplegada y al oponer resistencia es que es asegurado en el interior del inmueble ubicado en calle ***** número ***** de la colonia ***** del municipio de ***** , ***** , a las 15:57 horas, asegurándole en su poder un equipo telefónico de la marca ***** , color ***** con una tarjeta SIM de la marca ***** con número de serie ***** , con número de IMEI ***** , así como una identificación ***** a nombre del acusado ***** . Por otra parte y del resultado del desahogo de la diligencia de cateo, es que en el interior del inmueble ubicado en calle ***** número ***** de la colonia ***** del municipio de ***** , ***** , se localizó y se realizó el levantamiento del cuerpo sin vida de la víctima de iniciales ***** , a las 22:55



PODER JUDICIAL

H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

UNA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PRONTA, GRATUITA Y HONESTA ES DIGNA DE ASPIRACIÓN SOCIAL;
A SU REALIZACIÓN USTED PUEDE Y DEBE COLABORAR

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS
JUZGADO ESPECIALIZADO DE CONTROL DEL ÚNICO DISTRITO JUDICIAL,
SEDE XOCHITEPEC, MORELOS
RAMÓN VILLANUEVA URIBE

Sentencia de procedimiento abreviado.

CARPETA TÉCNICA. JC/1598/2019.

horas, quien presentó como causa de muerte por asfixia por estrangulación, lugar en donde el acusado ***** , frecuentaba a los moradores del inmueble ubicado en calle ***** número ***** de la colonia ***** del municipio de ***** , ***** , por la relación de amistad que el acusado tenía hacía con ellos, así mismo tenía libre acceso al interior del inmueble antes descrito, y que el acusado ***** , el día que es localizado el cuerpo sin vida de la víctima directa de iniciales ***** , se encontraba como encargado del inmueble antes citado, esto es que llevó acabo el ocultamiento del cuerpo sin vida de la víctima de iniciales *****...(Sic.)”.. Conducta con la cual el sujeto coactivo lesiona el bien jurídico tutelado por este tipo de antisociales, y que lo es en la especie es el patrimonio de las personas; por lo tanto, de acuerdo a los datos estudiados, a juicio de la que resuelve, están demostrados los elementos del delito de SECUESTRO EQUIPARADO, y como se ha venido estableciendo, la conducta desplegada por el activo, se encuentra adecuada a la hipótesis normativa que consignan el artículo 15 fracciones III y V de la Ley General para Prevenir y Sancionar los delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 7 fracción I (acción e instantáneo), 8 (delitos dolosos o culposos), 9 (doloso) y 13 fracción II (autor material) del Código Penal Federal; sin que se actualice alguna excluyente de incriminación o de la pretensión punitiva previstas por los artículos 23³¹ y 81³²del mismo ordenamiento legal.

³¹ **Artículo *23.-** Se excluye la incriminación penal cuando: I. Se realice el hecho sin intervención de la voluntad del agente; II.- Falte alguno de los elementos constitutivos que integran la descripción típica del delito de que se trate; III. Se actúe con el consentimiento del titular del bien jurídico afectado o de quien se halla legitimado por la ley para otorgarlo, siempre que: a) Se trate de un bien jurídico disponible; b) El titular o quien esté legitimado para consentir tenga la capacidad jurídica para disponer libremente del bien; y c) El consentimiento sea expreso o tácito y no medie algún vicio de la voluntad, o bien, que el hecho se realice en circunstancias tales que permitan presumir fundadamente que de haberse consultado al titular o a quien esté legitimado para consentir, éstos hubiesen otorgado el consentimiento; IV. Se repela una agresión real, actual o inminente y sin derecho en defensa de bienes jurídicos propios o ajenos, siempre que exista necesidad racional de la defensa empleada y no medie provocación dolosa suficiente e inmediata por parte del agredido o de su defensor. Se presume que existe legítima defensa, salvo prueba en contrario, en el caso de que se cause un daño racionalmente necesario a quien por cualquier medio trate de penetrar o penetre sin derecho al lugar donde habiten, aunque sea en forma temporal, el que se defiende o su familia, o cualquier persona a la que el inculpado tenga el deber de defender, o a las dependencias de ese lugar o al sitio en el que se encuentren bienes propios o ajenos respecto de los cuales tenga ese mismo deber. Igual presunción favorecerá al que cause un daño a otra persona en el momento de sorprenderla en alguno de los lugares antes citados, en circunstancias que revelen la posibilidad de una agresión; V. Se obre por la necesidad de salvaguardar un bien jurídico propio o ajeno, de un peligro real, actual o inminente, no ocasionado dolosamente por el inculpado, y que éste no tenga el deber jurídico de afrontar, siempre que no tenga a su alcance otro medio practicable y menos perjudicial; VI. Se obre legalmente en cumplimiento de un deber jurídico o en ejercicio de un derecho, siempre que exista necesidad racional de la conducta empleada; VII. Se obre bajo la amenaza irresistible de un mal real, actual o inminente, en bienes jurídicos propios o ajenos, siempre que no exista al alcance del agente otro medio practicable y menos perjudicial; VIII.- Se omite por impedimento insuperable la acción prevista como delito; IX. Al realizar la conducta el agente padezca un trastorno mental transitorio que le impida comprender el carácter ilícito del hecho o conducirse de acuerdo con esa comprensión, a no ser que el agente hubiese provocado dolosamente o por culpa grave su propio trastorno. En este caso responderá por el hecho cometido. X. Se realice la acción o la omisión bajo un error invencible sobre: a) Alguno de los elementos objetivos del hecho típico; b) La ilicitud de la conducta, ya sea porque el sujeto desconoce la existencia de la ley o el alcance de la

SEXTO.- Por lo que toca a la **RESPONSABILIDAD PENAL** del acusado ********* en la comisión del delito de **SECUESTRO EQUIPARADO**, en agravio de la víctima de quien en vida respondiera a las iniciales *********, éste **Juez de control** advierte que el Ministerio Público aportó datos suficientes para sostener la intervención dolosa del acusado en el hecho punible; es por ello que a efecto de señalar con precisión el valor otorgado a cada uno de los elementos probatorios tenidos en cuenta como eficaces para demostrar cada requisito de fondo, con la exposición de razones, circunstancias o causas que lo justifican y determinar así en que consistió la acción u omisión del imputado, su forma de intervención, la realización dolosa de su conducta según las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión en las que se consumaron los elementos del tipo penal, en el caso se considera que son suficientes los datos aportados por el Ministerio Público.

SÉPTIMO.- En vista de lo concluido en los precedentes considerandos, toca ahora **INDIVIDUALIZAR LA PENA** que corresponde aplicarse al acusado ********* se toma en consideración los artículos 21³³ y 22³⁴ de la Constitución Política de

misma, o porque cree que está justificada su conducta; o c) Alguna exculpante. XI. Se obre para salvar un bien jurídico y no se tenga otra alternativa de actuación no lesiva o menos lesiva.

³² **Artículo 81.-** La pretensión punitiva y la potestad ejecutiva se extinguirán por cualquiera de las siguientes causas, aplicables a imputables e inimputables, en sus respectivos casos, conforme a lo previsto en el presente Código: I. Sentencia ejecutoria o proceso anterior por el mismo delito; II. Cumplimiento de la sanción. En el supuesto de inimputables, se atenderá a los dispuesto en el tercer párrafo del artículo 57; III. Ley favorable. IV. Muerte del delincuente. V. Amnistía. VI. Reconocimiento de inocencia. VII. Perdón del ofendido o legitimado. VIII. Indulto. IX. Improcedencia del tratamiento de inimputables. X. Prescripción.

³³ **Artículo 21.** La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial. Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa, arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se permutará esta por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de treinta y seis horas. Si el infractor de los reglamentos gubernativos y de policía fuese jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salario de un día. Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa que se imponga por infracción de los reglamentos gubernativos y de policía, no excederá del equivalente a un día de su ingreso. El Ministerio Público podrá considerar criterios de oportunidad para el ejercicio de la acción penal, en los supuestos y condiciones que fije la ley. El Ejecutivo Federal podrá, con la aprobación del Senado en cada caso, reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas: **a)** La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública. La operación y desarrollo de estas acciones será competencia de la Federación, las entidades federativas y los Municipios en el ámbito de sus respectivas atribuciones. **b)** El establecimiento de las bases de datos criminalísticos y de personal para las instituciones de seguridad pública. Ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de seguridad pública si no ha sido debidamente certificado y registrado en el sistema. **c)** La formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de delitos. **d)** Se determinará la participación de la comunidad que coadyuvará, entre otros, en los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito, así como de las instituciones de seguridad pública. **e)** Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, a nivel nacional serán aportados a las entidades federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines.

³⁴ **Artículo 22.** Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado. No se considerará confiscación la aplicación de bienes de una persona cuando sea decretada para el pago de multas o impuestos, ni cuando la decreta una autoridad judicial para el pago de responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito. Tampoco se considerará confiscación el decomiso que ordene la autoridad judicial de los bienes en caso de enriquecimiento ilícito en los términos del artículo 109, la aplicación a favor del Estado de bienes asegurados que causen abandono en los términos de las disposiciones aplicables, ni la de aquellos bienes cuyo dominio se declare extinto en sentencia. En el caso de extinción de dominio se establecerá un procedimiento que se regirá por las siguientes reglas: **I.** Será jurisdiccional y autónomo del de materia penal; **II.** Procederá en los casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos, trata de personas y enriquecimiento ilícito, respecto de los bienes siguientes: **a)** Aquellos que sean instrumento, objeto o producto del delito, aun cuando no se haya dictado la sentencia que determine la responsabilidad penal, pero existan elementos suficientes para determinar



PODER JUDICIAL

H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS
JUZGADO ESPECIALIZADO DE CONTROL DEL ÚNICO DISTRITO JUDICIAL,
SEDE XOCHITEPEC, MORELOS
RAMÓN VILLANUEVA URIBE

Sentencia de procedimiento abreviado.

CARPETA TÉCNICA. JC/1598/2019.

los Estados Unidos Mexicanos, así como 51³⁵ y 52³⁶ del Código Penal Federal, por tanto, se atiende a:

1.- LA MAGNITUD DEL DAÑO CAUSADO AL BIEN JURÍDICO O DEL PELIGRO A QUE SE HUBIESE SIDO EXPUESTO.- En la especie, el ilícito por el que la Representante Social acreditó el hecho delictivo formalmente a ***** está previsto y sancionado por el artículo 15 fracciones III y V de la Ley General para Prevenir y Sancionar los delitos de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en correlación con el contenido de los artículos 7 fracción I (acción e instantáneo), 8 (delitos dolosos o culposos), 9 (doloso) y 13 fracción III (realización conjunta o coautoría) del Código Penal Federal; bien jurídico que se vio lesionado en agravio de la víctima quien en vida respondiera a las iniciales *****

2.- LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN U OMISIÓN Y DE LOS MEDIOS EMPLEADOS PARA EJECUTARLOS.- En el caso particular se atribuyó al acusado ***** la ejecución de un delito de acción, doloso y de resultado instantáneo, adecuándose su conducta a la hipótesis normativa prevista en los artículos 7, 8 y 9 del Código Penal Federal en vigor, lo anterior en razón que el sujeto activo de la conducta desplegó una serie de acciones en el mundo factico que desembocaron en una alteración de las circunstancias que participaron, favorecieron o encubrieron la privación de la libertad

que el hecho ilícito sucedió. **b)** Aquellos que no sean instrumento, objeto o producto del delito, pero que hayan sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes producto del delito, siempre y cuando se reúnan los extremos del inciso anterior. **c)** Aquellos que estén siendo utilizados para la comisión de delitos por un tercero, si su dueño tuvo conocimiento de ello y no lo notificó a la autoridad o hizo algo para impedirlo. **d)** Aquellos que estén intitulados a nombre de terceros, pero existan suficientes elementos para determinar que son producto de delitos patrimoniales o de delincuencia organizada, y el acusado por estos delitos se comporte como dueño. **III.** Toda persona que se considere afectada podrá interponer los recursos respectivos para demostrar la procedencia lícita de los bienes y su actuación de buena fe, así como que estaba impedida para conocer la utilización ilícita de sus bienes.

³⁵ **Artículo 51.-** Dentro de los límites fijados por la ley, los jueces y tribunales aplicarán las sanciones establecidas para cada delito, teniendo en cuenta las circunstancias exteriores de ejecución y las peculiares del delincuente; particularmente cuando se trate de indígenas se considerarán los usos y costumbres de los pueblos y comunidades a los que pertenezcan. En los casos de los artículos 60, fracción VI, 61, 63, 64, 64-Bis y 65 y en cualesquiera otros en que este Código disponga penas en proporción a las previstas para el delito intencional consumado, la punibilidad aplicable es, para todos los efectos legales, la que resulte de la elevación o disminución, según corresponda, de los términos mínimo y máximo de la pena prevista para aquél. Cuando se trate de prisión, la pena mínima nunca será menor de tres días. Cuando se cometa un delito doloso en contra de algún periodista, persona o instalación con la intención de afectar, limitar o menoscabar el derecho a la información o las libertades de expresión o de imprenta, se aumentará hasta en un tercio la pena establecida para tal delito. En el caso anterior, se aumentará la pena hasta en una mitad cuando además el delito sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones o la víctima sea mujer y concurren razones de género en la comisión del delito, conforme a lo que establecen las leyes en la materia.

³⁶ **Artículo 52.-** El juez fijará las penas y medidas de seguridad que estime justas y procedentes dentro de los límites señalados para cada delito, con base en la gravedad del ilícito, la calidad y condición específica de la víctima u ofendido y el grado de culpabilidad del agente, teniendo en cuenta: **I.-** La magnitud del daño causado al bien jurídico o del peligro a que hubiere sido expuesto; **II.-** La naturaleza de la acción u omisión y de los medios empleados para ejecutarla; **III.-** Las circunstancias de tiempo, lugar, modo u ocasión del hecho realizado; **IV.-** La forma y grado de intervención del agente en la comisión del delito; **V.-** La edad, la educación, la ilustración, las costumbres, las condiciones sociales y económicas del sujeto, así como los motivos que lo impulsaron o determinaron a delinquir. Cuando el procesado perteneciere a algún pueblo o comunidad indígena, se tomarán en cuenta, además, sus usos y costumbres; **VI.-** El comportamiento posterior del acusado con relación al delito cometido; y **VII.-** Las demás condiciones especiales y personales en que se encontraba el agente en el momento de la comisión del delito, siempre y cuando sean relevantes para determinar la posibilidad de haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma.

UNA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PRONTA, GRATUITA Y HONESTA ES DIGNA DE ASPIRACIÓN SOCIAL;
A SU REALIZACIÓN USTED PUEDE Y DEBE COLABORAR

a la víctima, hechos que tomando en consideración la edad y experiencia de vida del acusado, este tiene el conocimiento suficiente del contenido de la norma penal, que establece la prohibición de vulnerar la libertad de otra persona, mandamiento que no obstante su conocimiento fue transgredido de manera consiente y voluntaria por parte del acusado ***** , lo que lo que este tribunal considera que el acusado aceptó y buscó el resultado de su actuar, esto es, participar en la privación de la libertad a la víctima con la finalidad de obtener una cantidad de dinero a cambio de su liberación, vulnerando con esta conducta el bien jurídico tutelado a favor de la víctima.

3.- LAS CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO, LUGAR, MODO, U OCASIÓN DEL DELITO.- Estas quedaron precisadas en el capítulo correspondiente a la actualización del delito, no obstante se reproducen de nueva cuenta para la individualización de la sentencia: "...El pasado 26 de noviembre del año 2019, aproximadamente entre las 10:30 horas y las 23:00 horas, la víctima de iniciales ***** , fue privada de su libertad, desconociéndose hasta este momento el lugar de privación, posteriormente ese mismo día aproximadamente a las 23:00 horas, la familia de la víctima directa empieza a recibir llamadas de negociación, al número telefónico propiedad de la hija de la víctima de iniciales ***** , al número ***** , proveniente de la línea telefónica de la víctima directa con número ***** , exigiéndole el activo la cantidad de doscientos mil pesos, ya que tenían secuestrado a su señor padre y le daba 24 horas, para conseguir el dinero, al día siguiente 27 de noviembre de 2019 aproximadamente las 00:09 horas, la hija de la víctima recibe un mensaje vía WhatsApp proveniente del número de la víctima ***** , consistente en un audio de la voz, en el que se escucha la voz de la víctima directa ***** quien le dice, "que venda lo que tenga que vender, que tiene que entregar doscientos mil pesos, que venda su coche y que le dan 48 horas, enviándole una fotografía de su padre ***** , en la cual se observa amarrado de pies y manos a una cama y la cabeza tapada con trapo color blanco, en seguida recibe la víctima indirecta ***** , un segundo audio el cual es la voz de un masculino quien le dice "tienes 24 horas nada más, esto no es un juego o quieres que te mande un pedazo de él". Continúan las



PODER JUDICIAL

H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

UNA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PRONTA, GRATUITA Y HONESTA ES DIGNA DE ASPIRACIÓN SOCIAL;
A SU REALIZACIÓN USTED PUEDE Y DEBE COLABORAR

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS
JUZGADO ESPECIALIZADO DE CONTROL DEL ÚNICO DISTRITO JUDICIAL,
SEDE XOCHITEPEC, MORELOS
RAMÓN VILLANUEVA URIBE

Sentencia de procedimiento abreviado.

CARPETA TÉCNICA. JC/1598/2019.

llamadas de negociación por la liberación de la víctima, los días 27 y 28 de noviembre del año 2019, en diversos horarios, por parte del activo con la familia de la víctima al número telefónico ***** , registrándose dos números de origen ***** y ***** , en el que continuaban con la exigencia de los \$200,000 pesos que de lo contrario le causarían daño, pactando la hija de la víctima ***** , con el activo la cantidad de ciento setenta mil pesos, por la liberación de su padre hoy víctima , quien recibió indicaciones del activo del lugar del pago, realizando el pago de rescate en calle ***** del poblado de ***** del municipio de ***** , ***** , sin que la víctima de iniciales ***** fuera liberada. Por otra parte y derivado de los actos de investigación es que el día 02 de marzo de 2020, aproximadamente a las 15:50 horas, al constituirse el agente del ministerio público adscrito a la fiscalía especializada en combate al secuestro y extorsión, en calle ***** número ***** de la colonia ***** del municipio de ***** , ***** , acompañado por diversos elementos adscritos y comisionados a la misma fiscalía especializada y personal pericial de la fiscalía general del estado de Morelos, para llevar a cabo el desahogo de una diligencia de cateo, autorizada en la causa penal JC/1598/2019, correspondiente a la carpeta de investigación ***** , que se instruye por el delito de secuestro, cometido en agravio de una víctima de nombre con iniciales ***** es que al momento de llamar a la puerta de dicho inmueble el agente del ministerio público, el acusado ***** , es quien atiende al llamado desde el interior del inmueble, ostentándose como el que cuida el lugar, siendo el agente del ministerio público quien le hace del conocimiento el motivo de su presencia para realizar una diligencia de cateo, preguntando por el dueño o quien ahí viviera, respondiendo el acusado ***** "que no permitiría el acceso de nadie y que no daría el nombre de quien vive ahí", incluso el agente del ministerio público le da lectura al mandamiento judicial, explicándole que se trata de una investigación de secuestro y que se busca entre otras cosas a la víctima de iniciales ***** , con o sin vida; siendo esta diligencia de carácter urgente, momento en el

que el acusado ***** empuja la puerta cerrándola con fuerza, al tiempo que grita: ¡ que no, Ya le, dije que no van a entrar!, y por la conducta que mostró el acusado ***** , siendo la de impedir el ingreso del personal, obstaculizando el desarrollo de la investigación de secuestro en la carpeta de investigación ***** , relacionada en la búsqueda de la víctima de iniciales ***** , y ante esta conducta desplegada y al oponer resistencia es que es asegurado en el interior del inmueble ubicado en calle ***** número ***** de la colonia ***** del municipio de ***** , ***** , a las 15:57 horas, asegurándole en su poder un equipo telefónico de la marca ***** , color ***** con una tarjeta SIM de la marca ***** con número de serie ***** , con número de IMEI ***** , así como una identificación ***** a nombre del acusado ***** . Por otra parte y del resultado del desahogo de la diligencia de cateo, es que en el interior del inmueble ubicado en calle ***** número ***** de la colonia ***** del municipio de ***** , ***** , se localizó y se realizó el levantamiento del cuerpo sin vida de la víctima de iniciales ***** , a las 22:55 horas, quien presentó como causa de muerte por asfixia por estrangulación, lugar en donde el acusado ***** , frecuentaba a los moradores del inmueble ubicado en calle ***** número ***** de la colonia ***** del municipio de ***** , ***** , por la relación de amistad que el acusado tenía hacía con ellos, así mismo tenía libre acceso al interior del inmueble antes descrito, y que el acusado ***** , el día que es localizado el cuerpo sin vida de la víctima directa de iniciales ***** , se encontraba como encargado del inmueble antes citado, esto es que llevó a cabo el ocultamiento del cuerpo sin vida de la víctima de iniciales ***** ...(Sic.)”.

4.- LA FORMA Y GRADO DE INTERVENCIÓN DEL AGENTE EN LA COMISIÓN DEL DELITO.- El acusado intervino en los hechos ilícitos que se les reprochan a título de autor material, en una acción activa, de carácter instantánea, porque la afectación a la libertad de la víctima se consumó instantáneamente; obró de manera dolosa ya que produjo un resultado típico con plena conciencia del actuar de su conducta; según las circunstancias y



PODER JUDICIAL

H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

UNA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PRONTA, GRATUITA Y HONESTA ES DIGNA DE ASPIRACIÓN SOCIAL;
A SU REALIZACIÓN USTED PUEDE Y DEBE COLABORAR

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS
JUZGADO ESPECIALIZADO DE CONTROL DEL ÚNICO DISTRITO JUDICIAL,
SEDE XOCHITEPEC, MORELOS
RAMÓN VILLANUEVA URIBE

Sentencia de procedimiento abreviado.

CARPETA TÉCNICA. JC/1598/2019.

condiciones personales, esto es que de acuerdo, a su edad, nivel cultural, grado de escolaridad, y experiencia de vida, penetró de esta manera a la esfera de la ilicitud, tiene los elementos cognitivos para comprender lo ilícito de la conducta que desplegó, violando con ello una norma penal prohibitiva por su conducta dolosa desplegada.

5.- LA EDAD, LA EDUCACIÓN, LA ILUSTRACIÓN, LAS COSTUMBRES, LAS CONDICIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DEL SUJETO, ASÍ COMO LOS MOTIVOS QUE LO IMPULSARON O DETERMINARON A DELINQUIR. CUANDO EL PROCESADO PERTENECIERAN A ALGÚN PUEBLO O COMUNIDAD INDÍGENA, SE TOMARAN EN CUENTA, ADEMÁS, SUS USOS Y COSTUMBRES.- Sobre este aspecto se toman en consideraciones los generales del acusado:

❖ *****.- de ***** años, con fecha de nacimiento ***** de ***** de ***** . Originario del estado de ***** , de nacionalidad ***** . Estado civil ***** , con ***** dependientes económicos, ***** . De ocupación ***** . Con instrucción ***** . Ingreso aproximado de ***** , presente como enfermedad ***** . El nombre de su madre es ***** , ***** . No pertenece a ningún pueblo originario. Sabe leer y escribir. Con domicilio antes de ser detenido el ubicado en calle ***** número ***** de la colonia ***** en el municipio de ***** , ***** .

6.- EL COMPORTAMIENTO POSTERIOR DE LOS ACUSADOS CON RELACIÓN AL DELITO COMETIDO.- Al respecto, la fiscal no se ocupó de evidenciar un comportamiento negativo del acusado ***** posterior al delito.

7.- LAS DEMÁS CONDICIONES ESPECIALES Y

PERSONALES EN QUE SE ENCONTRABA EL AGENTE EN EL MOMENTO DE LA COMISIÓN DEL DELITO, SIEMPRE Y CUANDO SEAN RELEVANTES PARA DETERMINAR LA POSIBILIDAD DE HABER AJUSTADO SU CONDUCTA A LAS EXIGENCIAS DE LA NORMA.-

Sobre este aspecto, quedó acreditado que el acusado ***** gozaba de cabal salud mental y por lo tanto, les era exigible una conducta diversa a la desplegada; sin embargo, les es favorable que no reporta ningún antecedente penal que lo coloque en calidad de reincidente, lo que evidentemente incide en su grado de culpabilidad.

En mérito de lo anterior, debe establecerse que en cuanto a las circunstancias especiales del acusado ***** por el delito de **SECUESTRO EQUIPARADO**, relevante para determinar la posibilidad que tuvieron de ajustar su conducta a las exigencias de la norma, se aprecia que tiene la capacidad de autodeterminación para llevar a cabo o no la conducta ilícita, decidiendo contrariar la norma legal que prohíbe privar de la libertad a las personas, lo que se deduce de la educación, edad y medio social en que se desenvolvían; aspectos que les permitían comprender la prohibición de esa conducta y conducirse de acuerdo a esa comprensión al no existir factor alguno que los constriñera a actuar de la manera en que lo hizo, por lo que le era exigible actuar de manera distinta, de ahí que a criterio de este tribunal, y atento a las circunstancias particulares del ahora sentenciado ***** se estima que tiene conciencia plena para discernir entre el bien y el mal, así por ende, comprenden lo ilícito de su conducta, alcance y cómo evitarlas, máxime que dada la naturaleza del ilícito de que se trata, es dable pensar que no se debe vulnerar la libertad de las personas.

Concluyendo, atendiendo a las circunstancias peculiares del acusado, quien tiene conciencia plena para discernir entre el bien y el mal, así por ende, lo ilícito de su conducta, alcance, y para evitarla, máxime que dada la naturaleza del ilícito de que se trata en la especie, lo es de contenido socio-ético-negativo, esto es, que es dable en conocimiento común de cualquier persona, independientemente de su escasa instrucción escolar, sino por su edad y las lógicas de la experiencia que no se debe de imponer la



PODER JUDICIAL

H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS
JUZGADO ESPECIALIZADO DE CONTROL DEL ÚNICO DISTRITO JUDICIAL,
SEDE XOCHITEPEC, MORELOS
RAMÓN VILLANUEVA URIBE

Sentencia de procedimiento abreviado.

CARPETA TÉCNICA. JC/1598/2019.

copula a personas que por sus edad o condición psicológica no tienen la comprensión de la conducta que se le impone.

En consecuencia, de los medios de prueba y circunstancias que, concatenadas entre sí, forman amplia convicción para imponer la sanción correspondiente, en términos de la solicitud planteada por el Fiscal en esta salida alterna. Por lo que, haciendo uso del arbitrio judicial que la ley concede a éste Juzgador en la aplicación de las sanciones, con base a lo solicitado por el Agente del Ministerio Público en el **procedimiento abreviado**, se considera justo y equitativo imponer a la acusada una pena de **TRES AÑOS, SEIS MESES DE PRISIÓN**, sanción privativa de libertad que deberá de cumplir en el lugar que para el efecto designe el Ejecutivo del Estado, con deducción del tiempo que el sentenciado ha estado privado de su libertad personal desde el día de su detención material, en flagrancia el día dos de marzo del año dos mil veinte, por lo que ha estado de privado de su libertad derivado de los hechos materia de la presente causa, **UN AÑO, TRES MESES Y VEINTINUEVE DÍAS**, salvo error aritmético; lo anterior una vez que cause ejecutoria la presente resolución vía el Órgano Jurisdiccional correspondiente.

La pena de mérito deberá cumplir el acusado en el lugar que para el efecto designe el Juez de Ejecución que por turno le corresponda vigilar el debido y exacto cumplimiento de la presente sentencia. En el entendido de que el sitio destinado para el cumplimiento de dicha pena privativa será distinto y completamente separado de aquél destinado a la prisión preventiva. Pena que se entiende impuesta con reducción de un día por cada dos de trabajo, siempre que el interno participe regularmente en las actividades educativas que se organicen en el establecimiento y revele por otros datos efectivos para su reinserción social, siendo este último requisito estrictamente indispensable.

UNA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PRONTA, GRATUITA Y HONESTA ES DIGNA DE ASPIRACIÓN SOCIAL;
A SU REALIZACIÓN USTED PUEDE Y DEBE COLABORAR

OCTAVO.- Por otra parte, toda vez que quedó debidamente acreditada la **PLENA RESPONSABILIDAD PENAL** del acusado, y en atención a la solicitud planteada por la Fiscalía respecto **A LA REPARACIÓN DEL DAÑO** es importante señalar que tomando en consideración, que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 20, expresa entre las garantías que se confieren a la víctima, el establecido en su fracción IV, el cual indica

"IV.- Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria.

La Ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño;"

Asimismo, la Codificación Nacional Procesal Penal en el Estado establece en su artículo 109, dentro de los Derechos de la víctima el consistente en:

"Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido

En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: [...]"

XXV. A que se le repare el daño causado por la comisión del delito, pudiendo solicitarlo directamente al Órgano jurisdiccional, sin perjuicio de que el Ministerio Público lo solicite; [...]"

La reparación del daño en materia penal se aplica al momento de la individualización de la pena, toda vez que constituye una sanción pecuniaria que debe ser impuesta al sujeto activo del delito, lo que se advierte de los artículos 29, 30, 30bis, 31, 31Bis, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 y 39 del Código Penal Federal, que dicen:

"Artículo 29.- La sanción pecuniaria comprende la multa y la reparación del daño.

La multa consiste en el pago de una cantidad de dinero al Estado, que se fijará por días multa, los cuales no podrán exceder de mil, salvo los casos que la propia ley señale. El día multa equivale a la percepción neta diaria del sentenciado en el momento de consumir el delito, tomando en cuenta todos sus ingresos.



PODER JUDICIAL

H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

UNA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PRONTA, GRATUITA Y HONESTA ES DIGNA DE ASPIRACIÓN SOCIAL;
A SU REALIZACIÓN USTED PUEDE Y DEBE COLABORAR

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS
JUZGADO ESPECIALIZADO DE CONTROL DEL ÚNICO DISTRITO JUDICIAL,
SEDE XOCHITEPEC, MORELOS
RAMÓN VILLANUEVA URIBE

Sentencia de procedimiento abreviado.

CARPETA TÉCNICA. JC/1598/2019.

Para los efectos de este Código, el límite inferior del día multa será el equivalente al salario mínimo diario vigente en el lugar donde se consumó el delito. Por lo que toca al delito continuado, se atenderá al salario mínimo vigente en el momento consumativo de la última conducta. Para el permanente, se considerará el salario mínimo en vigor en el momento en que cesó la consumación.

Cuando se acredite que el sentenciado no puede pagar la multa o solamente puede cubrir parte de ella, la autoridad judicial podrá sustituirla, total o parcialmente, por prestación del trabajo en favor de la comunidad.

Cada jornada de trabajo saldrá un día multa. Cuando no sea posible o conveniente la sustitución de la multa por la prestación de servicios, la autoridad judicial podrá colocar al sentenciado en libertad bajo vigilancia, que no excederá del número de días multa sustituidos.

Si el sentenciado se negare sin causa justificada a cubrir el importe de la multa, el Estado la exigirá mediante el procedimiento económico coactivo.

En cualquier tiempo podrá cubrirse el importe de la multa, descontándose de ésta la parte proporcional a las jornadas de trabajo prestado en favor de la comunidad, o al tiempo de prisión que el reo hubiere cumplido tratándose de la multa sustitutiva de la pena privativa de libertad, caso en el cual la equivalencia será a razón de un día multa por un día de prisión.

Artículo 30. La reparación del daño debe ser integral, adecuada, eficaz, efectiva, proporcional a la gravedad del daño causado y a la afectación sufrida, comprenderá cuando menos:

I. La restitución de la cosa obtenida por el delito y si no fuere posible, el pago del precio de la misma, a su valor actualizado;

II. La indemnización del daño material y moral causado, incluyendo la atención médica y psicológica, de los servicios sociales y de rehabilitación o tratamientos curativos necesarios para la recuperación de la salud, que hubiere requerido o requiera la víctima, como consecuencia del delito. En los casos de delitos contra el libre desarrollo de la personalidad, la libertad y el normal desarrollo psicosexual y en su salud mental, así como de violencia familiar, además comprenderá el pago de los tratamientos psicoterapéuticos que sean necesarios para la víctima;

III. El resarcimiento de los perjuicios ocasionados;

IV. El pago de la pérdida de ingreso económico y lucro cesante, para ello se tomará como base el salario que en el momento de sufrir el delito tenía la víctima y en caso de no contar con esa información, será conforme al salario mínimo vigente en el lugar en que ocurra el hecho;

V. El costo de la pérdida de oportunidades, en particular el empleo, educación y prestaciones sociales, acorde a sus circunstancias;

VI. La declaración que restablezca la dignidad y reputación de la víctima, a través de medios electrónicos o escritos;

VII. La disculpa pública, la aceptación de responsabilidad, así como la garantía de no repetición, cuando el delito se cometa por servidores públicos.

Los medios para la rehabilitación deben ser lo más completos posible, y deberán permitir a la víctima participar de forma plena en la vida pública, privada y social.

Artículo 30 Bis.- Tienen derecho a la reparación del daño en el siguiente orden: 1o. El ofendido; 2o. En caso de fallecimiento del ofendido, el cónyuge supérstite o el concubinario o concubina, y los hijos menores de edad; a falta de éstos los demás descendientes, y ascendientes que dependieran económicamente de él al momento del fallecimiento.

Artículo 31. La reparación será fijada por los jueces, según el daño que sea preciso reparar, con base en las pruebas obtenidas en el proceso y la afectación causada a la víctima u ofendido del delito.

Para los casos de reparación del daño causado con motivo de delitos por imprudencia, el Ejecutivo de la Unión reglamentará, sin perjuicio de la resolución que se dicte por la autoridad judicial, la forma en que, administrativamente, deba garantizarse mediante seguro especial dicha reparación.

Artículo 31 Bis. En todo proceso penal, el Ministerio Público estará obligado a solicitar, de oficio, la condena en lo relativo a la reparación del daño y el juez está obligado a resolver lo conducente.

El incumplimiento de esta disposición se sancionara conforme a lo dispuesto por la fracción VII y el párrafo segundo del artículo 225 de este Código.

En todo momento, la víctima deberá estar informada sobre la reparación del daño.

Artículo 32.- Están obligados a reparar el daño en los términos del artículo 29:

I.- Los ascendientes, por los delitos de sus descendientes que se hallaren bajo su patria potestad:

II.- Los tutores y los custodios, por los delitos de los incapacitados que se hallen bajo su autoridad;

III.- Los directores de internados o talleres, que reciban en su establecimiento discípulos o aprendices menores de 16 años, por los delitos que ejecuten éstos durante el tiempo que se hallen bajo el cuidado de aquéllos;



PODER JUDICIAL

H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

UNA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PRONTA, GRATUITA Y HONESTA ES DIGNA DE ASPIRACIÓN SOCIAL;
A SU REALIZACIÓN USTED PUEDE Y DEBE COLABORAR

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS
JUZGADO ESPECIALIZADO DE CONTROL DEL ÚNICO DISTRITO JUDICIAL,
SEDE XOCHITEPEC, MORELOS
RAMÓN VILLANUEVA URIBE

Sentencia de procedimiento abreviado.

CARPETA TÉCNICA. JC/1598/2019.

IV.- Los dueños, empresas o encargados de negociaciones o establecimientos mercantiles de cualquier especie, por los delitos que cometan sus obreros, jornaleros, empleados, domésticos y artesanos, con motivo y en el desempeño de su servicio;

V.- Las sociedades o agrupaciones, por los delitos de sus socios o gerentes directores, en los mismos términos en que, conforme a las leyes, sean responsables por las demás obligaciones que los segundos contraigan.

Se exceptúa de esta regla a la sociedad conyugal, pues, en todo caso, cada cónyuge responderá con sus bienes propios por la reparación del daño que cause, y

VI. Cualquier institución, asociación, organización o agrupación de carácter religioso, cultural, deportivo, educativo, recreativo o de cualquier índole, cuyos empleados, miembros, integrantes, auxiliares o ayudantes que realicen sus actividades de manera voluntaria o remunerada, y

VII.- El Estado, solidariamente, por los delitos dolosos de sus servidores públicos realizados con motivo del ejercicio de sus funciones, y subsidiariamente cuando aquéllos fueren culposos.

Artículo 33.- La obligación de pagar la sanción pecuniaria es preferente con respecto a cualesquiera otras contraídas con posterioridad al delito, a excepción de las referentes a alimentos y relaciones laborales.

Artículo 34.- La reparación del daño proveniente de delito que deba ser hecha por el delincuente tiene el carácter de pena pública y se exigirá de oficio por el Ministerio Público. El ofendido o sus derechohabientes podrán aportar al Ministerio Público o al juez en su caso, los datos y pruebas que tengan para demostrar la procedencia y monto de dicha reparación, en los términos que prevenga el Código de Procedimientos Penales.

El incumplimiento por parte de las autoridades de la obligación a que se refiere el párrafo anterior, será sancionado con multa de treinta a cuarenta días de salario mínimo.

Cuando dicha reparación deba exigirse a tercero, tendrá el carácter de responsabilidad civil y se tramitará en forma de incidente, en los términos que fije el propio Código de Procedimientos Penales.

Quien se considere con derecho a la reparación del daño, que no pueda obtener ante el juez penal, en virtud de no ejercicio de la acción por parte del Ministerio Público, sobreseimiento o sentencia absolutoria, podrá recurrir a la vía civil en los términos de la legislación correspondiente.

Artículo 35.- El importe de la sanción pecuniaria se distribuirá: entre el Estado y la parte ofendida; al primero se aplicará el importe de la multa, y a la segunda el de la reparación.

Si no se logra hacer efectivo todo el importe de la sanción pecuniaria, se cubrirá de preferencia la reparación del daño, y en su caso, a prorrata entre los ofendidos.

Si la parte ofendida renunciare a la reparación, el importe de ésta se aplicará al Estado.

Los depósitos que garanticen la libertad caucional se aplicarán como pago preventivo a la reparación del daño cuando el inculpado se substraiga a la acción de la justicia.

Al mandarse hacer efectivos tales depósitos, se prevendrá a la autoridad ejecutora que conserve su importe a disposición del tribunal, para que se haga su aplicación conforme a lo dispuesto en los párrafos anteriores de este artículo.

Artículo 36.- Cuando varias personas cometan el delito, el juez fijará la multa para cada uno de los delincuentes, según su participación en el hecho delictuoso y sus condiciones económicas; y en cuanto a la reparación del daño, la deuda se considerará como mancomunada y solidaria.

Artículo 37.- La reparación del daño se mandará hacer efectiva, en la misma forma que la multa. Una vez que la sentencia que imponga tal reparación cauce ejecutoria, el tribunal que la haya pronunciado remitirá de inmediato copia certificada de ella a la autoridad fiscal competente y ésta, dentro de los tres días siguientes a la recepción de dicha copia, iniciará el procedimiento económico-coactivo, notificando de ello a la persona en cuyo favor se haya decretado, o a su representante legal.

Artículo 38.- Si no alcanza a cubrirse la responsabilidad pecuniaria con los bienes del responsable o con el producto de su trabajo en la prisión, el reo liberado seguirá sujeto a la obligación de pagar la parte que falte.

Artículo 39.- El juzgador, teniendo en cuenta el monto del daño y la situación económica del obligado, podrá fijar plazos para el pago de la reparación de aquél, los que en su conjunto no excederán de un año, pudiendo para ello exigir garantía si lo considera conveniente.

La autoridad a quien corresponda el cobro de la multa podrá fijar plazos para el pago de ésta, tomando en cuenta las circunstancias del caso”.

Como se aprecia, dichos numerales establecen el catálogo de penas que pueden ser impuestas por el juzgador al momento de individualizar éstas, dentro de las que se encuentran las sanciones pecuniarias. Así mismo estas porciones normativas, nos indican los rubros que tradicionalmente comprende la reparación del daño.



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS
JUZGADO ESPECIALIZADO DE CONTROL DEL ÚNICO DISTRITO JUDICIAL,
SEDE XOCHITEPEC, MORELOS
RAMÓN VILLANUEVA URIBE

Sentencia de procedimiento abreviado.

CARPETA TÉCNICA. JC/1598/2019.

PODER JUDICIAL

H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

UNA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PRONTA, GRATUITA Y HONESTA ES DIGNA DE ASPIRACIÓN SOCIAL;
A SU REALIZACIÓN USTED PUEDE Y DEBE COLABORAR

Conforme a las disposiciones legales transcritas, se aprecia que dentro de las sanciones pecuniarias se ubica la reparación del daño.

Asimismo, la normatividad de referencia nos indica la naturaleza jurídica de la reparación del daño y la manera en que debe ser fijada por el Juez de proceso al momento de individualizar la pena.

En efecto, esta autoridad aprecia que la reparación del daño en materia penal, es constitutiva de una "pena" o "sanción pública" impuesta al gobernado/imputado mediante sentencia; por tanto, al incluirse dicha figura dentro del derecho penal, su determinación y cuantificación debe regirse por los principios de integralidad, efectividad y proporcionalidad aplicables a la materia.

La reparación del daño en la vía penal tiene una comprensión dual. Por un lado, al satisfacer una función social, en su carácter de pena; por otro, una función privada, al contribuir a resarcir la afectación ocasionada a la víctima u ofendido del delito, que con motivo de la comisión de un ilícito penal le fue cometido, lo que trae, a su vez, para el agente del delito una responsabilidad civil extracontractual de carácter subjetivo que, por imperativo del artículo 20 de la Constitución Federal, necesariamente debe dar lugar a una reparación del daño en el proceso penal.

Lo anterior, independientemente si la víctima u ofendido decide ejercer una acción particular, en virtud de que ambas reparaciones (aún con un mismo origen) son autónomas y pueden subsistir una y otra, pues la responsabilidad civil (objetiva y subjetiva) nacida de la comisión de un ilícito penal no cesa porque dicha conducta se haya sancionado mediante la aplicación del derecho punitivo, antes bien, subsiste con sujeción a las reglas del derecho

civil, ya que si bien ambas pudieron haber tenido el mismo origen, tienen una naturaleza distinta.

Ciertamente, los tipos de responsabilidad:

- i. La reparación del daño en la vía penal deriva de una responsabilidad de índole subjetiva, se genera cuando se emite una sentencia condenatoria y constituye una pena derivada de que se ha estimado la responsabilidad del sujeto activo y
- ii. En la responsabilidad civil objetiva se encuentra ausente el elemento subjetivo, se produce por el uso de mecanismos que son peligrosos en sí mismos.

Así, si en el proceso penal el juzgador dicta una sentencia condenatoria se encuentra obligado, por imposición del artículo 20 de la Constitución Federal, a imponer la sanción pecuniaria correspondiente a la reparación del daño en contra del agente del delito.

A partir de lo anterior, es conveniente recordar que la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolverse el amparo directo en revisión **2384/2013**³⁷, estableció que la reparación del daño es una sanción aplicable por la comisión de delitos, cuya responsabilidad es atribuible a la persona declarada responsable de la comisión del hecho delictivo del que derive, sanción pecuniaria que a su vez constituye un derecho humano reconocido en el artículo 20, apartado C, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos⁴, a favor de las personas ubicadas en el supuesto de víctimas u ofendidos de la conducta ilícita penal, cuyo cumplimiento exige que se satisfaga de forma eficaz e integral.

De igual modo, en dicho asunto **la Primera Sala del más alto tribunal resolvió que el reconocimiento de este derecho**

³⁷ Resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de siete de febrero de dos mil quince, por mayoría de tres votos de los Señores Ministros: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz (Ponente) y Olga Sánchez Cordero de García Villegas, en contra de los emitidos por los Señores Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Presidente Jorge Mario Pardo Rebolledo



PODER JUDICIAL

H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

UNA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PRONTA, GRATUITA Y HONESTA ES DIGNA DE ASPIRACIÓN SOCIAL;
A SU REALIZACIÓN USTED PUEDE Y DEBE COLABORAR

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS
JUZGADO ESPECIALIZADO DE CONTROL DEL ÚNICO DISTRITO JUDICIAL,
SEDE XOCHITEPEC, MORELOS
RAMÓN VILLANUEVA URIBE

Sentencia de procedimiento abreviado.

CARPETA TÉCNICA. JC/1598/2019.

humano impone un deber de actuación para las autoridades del Estado. Se sostuvo que una vez acreditada la legitimación ad proesum de quien se ha ubicado en la condición de víctima u ofendido y concluida la instrucción del proceso penal seguida respecto del delito que afectó la esfera jurídica de aquél, entonces corresponde al Ministerio Público, como ente encargado de impulsar la acusación penal, solicitar que se condene al responsable al resarcimiento de la afectación que generó con su actuar ilícito, mediante la reparación del daño. Recordemos que en el concepto amplio de reparación del daño pueden estar comprendidos diversos rubros genéricos, en atención al tipo del delito cometido, entre ellos la reparación material, moral y de perjuicios ocasionados.

Así, de lo antes expuesto se aprecia que en el citado amparo directo en revisión **2384/2013**³⁸ la Primera Sala estableció, por un lado, que la reparación del daño como pena es una consecuencia jurídica para el sujeto que ha sido considerado mediante sentencia penalmente responsable de la comisión de un delito. Por lo que, el Ministerio Público deberá solicitar que se imponga también esta sanción, y a su vez, la autoridad judicial está obligada a imponerla. Por el otro, que la fijación de la condena de reparación del daño por parte de la autoridad judicial no puede omitir considerar los hechos y circunstancias probadas en el juicio penal y que sustenten la propia sentencia que emite.

El ejercicio correcto de esta actividad judicial permite al juzgador desenvolverse en un ámbito de equidad de las partes y protección de los derechos humanos que a cada parte del proceso penal deben respetársele, a fin de imponer la condena a la reparación del daño, respecto de los rubros solicitados por el Ministerio Público, pero en orden a la cuantificación que haya quedado probada en actuaciones, de manera que se cumpla con

³⁸ 3 Párrafo 56, amparo directo en revisión 2384/2013.

el resarcimiento efectivo e integral de la reparación del daño a favor de la víctima u ofendido.

Respecto al resarcimiento efectivo e integral de la reparación del daño a favor de la víctima u ofendido, conviene recordar que en el sistema jurídico interno destaca la existencia de la Ley General de Víctimas, de la que se desprenden los conceptos sustanciales siguientes:

- El concepto de víctimas directas es aplicable a las personas físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional, o en general cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte. Son víctimas indirectas los familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima directa que tengan una relación inmediata con ella.
 - La calidad de víctimas se adquiere con la acreditación del daño o menoscabo de los derechos en los términos establecidos por esa ley, con independencia de que se identifique, aprehenda, o condene al responsable del daño o de que la víctima participe en algún procedimiento judicial o administrativo.
 - Las reparaciones individuales, administrativas o judiciales, así como las reparaciones colectivas, deben ser complementarias para alcanzar la integralidad que busca la reparación.
 - Se entiende por daño, la muerte o lesiones corporales, daños o perjuicios morales y materiales, salvo a los bienes de propiedad de la persona responsable de los
-



PODER JUDICIAL

H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

UNA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PRONTA, GRATUITA Y HONESTA ES DIGNA DE ASPIRACIÓN SOCIAL;
A SU REALIZACIÓN USTED PUEDE Y DEBE COLABORAR

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS
JUZGADO ESPECIALIZADO DE CONTROL DEL ÚNICO DISTRITO JUDICIAL,
SEDE XOCHITEPEC, MORELOS
RAMÓN VILLANUEVA URIBE

Sentencia de procedimiento abreviado.

CARPETA TÉCNICA. JC/1598/2019.

daños; pérdidas de ingresos directamente derivadas de un interés económico; pérdidas de ingresos directamente derivadas del uso del medio ambiente incurridas como resultado de un deterioro significativo del medio ambiente, teniendo en cuenta los ahorros y los costos; costo de las medidas de restablecimiento, limitado al costo de las medidas efectivamente adoptadas o que vayan a adoptarse; y costo de las medidas preventivas, incluidas cualesquiera pérdidas o daños causados por esas medidas, en la medida en que los daños deriven o resulten.

- Por hecho victimizante debe entenderse los actos u omisiones que dañan, menoscaban o ponen en peligro los bienes jurídicos o derechos de una persona convirtiéndola en víctima. Éstos pueden estar tipificados como delito o constituir una violación a los derechos humanos reconocidos por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que México forme parte.
- La víctima tiene derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación integral a través de recursos y procedimientos accesibles, apropiados, suficientes, rápidos y eficaces.
- Las víctimas tienen derecho a un recurso judicial adecuado y efectivo, ante las autoridades independientes, imparciales y competentes, que les garantice el ejercicio de su derecho a conocer la verdad, a que se realice con la debida diligencia una investigación inmediata y exhaustiva del delito o de las violaciones de derechos humanos sufridas por ellas; a que los autores de los delitos y de las violaciones de derechos, con el respeto al debido proceso, sean

enjuiciados y sancionados; y a obtener una reparación integral por los daños sufridos.

- Durante el proceso penal las víctimas tienen derecho a que se les repare el daño en forma expedita, proporcional y justa, en los términos del mismo instrumento normativo aplicable. En los casos en que la autoridad judicial dicte una sentencia condenatoria no podrá absolver al responsable de dicha reparación. Si la víctima o su Asesor Jurídico no solicitaran la reparación del daño, el Ministerio Público está obligado a hacerlo.
 - Las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia del delito o hecho victimizante que las ha afectado o de las violaciones de derechos humanos que han sufrido, comprendiendo medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición.
 - La reparación integral comprenderá, entre otras circunstancias, que con la restitución se busque devolver a la víctima a la situación anterior a la comisión del delito o a la violación de sus derechos humanos.
 - Las víctimas tendrán derecho a la restitución en sus derechos conculcados, así como en sus bienes y propiedades si hubieren sido despojadas de ellos. Por lo que, entre las medidas de restitución deberá comprenderse la devolución de todos los bienes o valores de su propiedad que hayan sido incautados o recuperados por las autoridades incluyendo sus frutos y accesorios, y si no fuese posible, el pago de su valor actualizado. Si se trata de bienes fungibles, el juez
-



PODER JUDICIAL

H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS
JUZGADO ESPECIALIZADO DE CONTROL DEL ÚNICO DISTRITO JUDICIAL,
SEDE XOCHITEPEC, MORELOS
RAMÓN VILLANUEVA URIBE

Sentencia de procedimiento abreviado.

CARPETA TÉCNICA. JC/1598/2019.

podrá condenar a la entrega de un objeto igual al que fuese materia de delito sin necesidad de recurrir a prueba pericial.

Bajo ese marco normativo se obtiene que la pena pecuniaria en la vertiente de reparación del daño, constituye la plena restitución, siempre que sea posible, consistente en el restablecimiento de la situación anterior a la comisión del delito y, de no ser esto posible, se debe determinar una serie de medidas para, además de garantizar los derechos conculcados, reparar las consecuencias que las infracciones produjeron, como lo es establecer el pago de una indemnización como compensación por los daños ocasionados, ello, para resarcir a las víctimas en el goce de sus derechos producidos por la violación o por cualquier medida o situación que provocó la afectación.

Pues se reitera, la reparación del daño, es una consecuencia jurídica que se impone como sanción derivada de la comisión de un delito penal y la demostración de responsabilidad del sentenciado, por la generación de afectación a terceros y que debe resarcirse. En este contexto, si bien comparte, con la multa como sanción, su carácter de afectación pecuniaria, lo cierto es que tiene un carácter autónomo. La multa se encuentra establecida por el legislador en la norma penal, en tanto que la reparación del daño depende de la existencia de factores que demuestren que la conducta ilícita haya generado una afectación que deba ser resarcida.

Por ello, para que la reparación del daño derivada de un delito cumpla con la finalidad constitucional de protección y garantía como derecho humano en favor de la víctima u ofendido, debe observar los parámetros siguientes: a) cubrirse en forma expedita, proporcional y justa, como resultado de la conclusión del proceso penal, en donde el Ministerio Público tiene la obligación de solicitar la condena y el juzgador de imponerla siempre que dicte

UNA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PRONTA, GRATUITA Y HONESTA ES DIGNA DE ASPIRACIÓN SOCIAL;
A SU REALIZACIÓN USTED PUEDE Y DEBE COLABORAR

sentencia condenatoria b) ser oportuna, plena, integral y efectiva, en relación con el daño ocasionado como consecuencia del delito, lo cual comprende que se establezcan medidas de restitución, rehabilitación, compensación y satisfacción; c) la reparación integral tiene como objetivo que con la restitución se devuelva a la víctima u ofendido a la situación anterior a la comisión del delito, lo que comprende cualquier tipo de afectación generada: económica, moral, física, psicológica, etcétera; d) la restitución material comprende la devolución de bienes afectados con la comisión del delito y, sólo en caso de que no sea posible, entonces el pago de su valor; y, e) la efectividad de la reparación del daño depende de la condición de resarcimiento que otorgue a la víctima u ofendido del delito, que deberá ser proporcional, justa, plena e integral, pues, de lo contrario, no se satisface el resarcimiento de la afectación.

En esa tesitura, se infieren las siguientes notas sustanciales de la reparación del daño:

- A. La reparación como sanción pecuniaria constituye una pena o sanción pública consiste en:
 - I. La devolución de la cosa obtenida con la comisión del delito, y si ello no es posible, el pago de su precio;
 - II. La indemnización del daño material y moral causado, y;
 - III. El resarcimiento de los perjuicios derivados de la comisión del ilícito.

- B. La reparación del daño será fijada por los jueces, según el daño que sea preciso reparar, de acuerdo con las pruebas obtenidas durante el proceso.

En tal sentido, **el concepto de reparación del daño, al que se refiere la fracción IV, del apartado C, del artículo 20, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos constituye un**



PODER JUDICIAL

H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

UNA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PRONTA, GRATUITA Y HONESTA ES DIGNA DE ASPIRACIÓN SOCIAL;
A SU REALIZACIÓN USTED PUEDE Y DEBE COLABORAR

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS
JUZGADO ESPECIALIZADO DE CONTROL DEL ÚNICO DISTRITO JUDICIAL,
SEDE XOCHITEPEC, MORELOS
RAMÓN VILLANUEVA URIBE

Sentencia de procedimiento abreviado.

CARPETA TÉCNICA. JC/1598/2019.

derecho humano reconocido en el orden jurídico nacional e internacional en favor de aquellas personas que se ubiquen en el supuesto fáctico de víctimas u ofendidos por la comisión de un hecho constitutivo de delito que sancionan la ley penal.

Derecho humano que impone un deber de actuación para las autoridades del Estado una vez acreditada la legitimación ad proesum de quien se ha ubicado en la condición de víctima u ofendido y concluida la instrucción del proceso penal seguida respecto del delito que afectó la esfera jurídica de aquél.

De lo cual se colige el derecho que tiene la víctima para solicitar el resarcimiento de los daños ya sean morales o materiales ocasionados por la comisión de un delito, cuya solicitud y acreditación debe ser sancionada por el Juzgador, debiendo constreñir dicha obligación de pago en la sentencia condenatoria que se dictase.

Por lo que en base a lo anterior esta autoridad jurisdiccional debe determina el monto para la reparación del daño a favor de la víctima **de iniciales ******* la cual se determina en la cantidad de **\$100,000.00 (CIEN MIL PESOS 00/100 M.N.) a favor de la víctima indirecta de iniciales ******* en razón del acuerdo realizado entre el agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada de Combate el Secuestro y la Extorsión, Licenciado **OMAR SAID OLIBARES HERNÁNDEZ**; la Asesor Jurídica Adscrita a la Fiscalía Especializada de Combate el Secuestro y la Extorsión, Licenciada **MARÍA CASANDRA DÍAZ MEDINA**; la Defensa Particular del acusado Licenciado ***** y el sentenciado *****.

NOVENO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo **42³⁹** del Código Penal Federal, se ordena amonestar y apercibir de manera pública una vez que la presente sentencia quede firme, al sentenciado ***** y la autoridad jurisdiccional en materia de

³⁹ **Artículo 47.-** La amonestación puede ser pública o privada, y consiste en el señalamiento que el tribunal hace al acusado sobre las consecuencias individuales y sociales del delito que cometió.

ejecución penal hará el señalamiento al sentenciado de las graves consecuencias individuales y sociales del delito que cometió, ya que es atentatorio a la libertad y el sano desarrollo psicosexual de las personas, así mismo se le conmina al sentenciado, para que se abstenga de cometer un nuevo delito, toda vez que esto implica graves consecuencias jurídicas en su persona.

DECIMO.- Se suspenden los derechos o prerrogativas al sentenciado ********* por el mismo término de la pena de prisión impuesta, conforme a lo dispuesto por el artículo 38⁴⁰ Fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 49⁴¹ y 50⁴² del Código Penal vigente en el Estado; **así como los artículos 198⁴³ numerales 3 y artículo 199⁴⁴ numeral 8, reformados del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. En la inteligencia de que una vez que el sentenciado haya purgado la pena impuesta, se reincorporará al padrón electoral a dicho ciudadano para que sea rehabilitado en sus derechos políticos. Ello**

⁴⁰ **Artículo 38.** Los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden: **I.** Por falta de cumplimiento, sin causa justificada, de cualquiera de las obligaciones que impone el artículo 36. Esta suspensión durará un año y se impondrá además de las otras penas que por el mismo hecho señalare la ley; **II.** Por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a contar desde la fecha del auto de formal prisión; **III.** Durante la extinción de una pena corporal; **IV.** Por vagancia o ebriedad consuetudinaria, declarada en los términos que prevengan las leyes; **V.** Por estar prófugo de la justicia, desde que se dicte la orden de aprehensión hasta que prescriba la acción penal; y **VI.** Por sentencia ejecutoria que imponga como pena esa suspensión. La ley fijará los casos en que se pierden, y los demás en que se suspenden los derechos de ciudadano, y la manera de hacer la rehabilitación.

⁴¹ **Artículo 49.-** La suspensión implica la privación temporal de derechos, cargos o funciones políticas, civiles, laborales o familiares de los que sea titular el sentenciado. La privación significa la pérdida de aquéllos. La inhabilitación consiste en la incapacidad, temporal o definitiva, para el desempeño de las actividades previstas en la ley o en la condena.

⁴² **Artículo 50.-** La suspensión, la privación y la inhabilitación resultan del mandato de la ley o de la sentencia judicial. La suspensión durará el tiempo que la ley ordene, y en todo caso el que dure la sanción principal impuesta al sujeto, a no ser que en la sentencia se resuelva que comenzará o proseguirá al terminar la principal, cuando así lo disponga este Código.

⁴³ **Artículo 198 1.** A fin de mantener permanentemente actualizados el catálogo general de electores y el padrón electoral, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores recabará de los órganos de las administraciones públicas federal y estatal la información necesaria para registrar todo cambio que lo afecte. 2. Los servidores públicos del Registro Civil deberán informar al Instituto de los fallecimientos de ciudadanos, dentro de los diez días siguientes a la fecha de expedición del acta respectiva. 3. Los jueces que dicten resoluciones que decreten la suspensión o pérdida de derechos políticos o la declaración de ausencia o presunción de muerte de un ciudadano así como la rehabilitación de los derechos políticos de los ciudadanos de que se trate, deberán notificarlas al Instituto dentro de los diez días siguientes a la fecha de expedición de la respectiva resolución. 4. La Secretaría de Relaciones Exteriores deberá dar aviso al Instituto, dentro de los diez días siguientes a la fecha en que: a) Expida o cancele cartas de naturalización; b) Expida certificados de nacionalidad; y c) Reciba renunciaciones a la nacionalidad. 5. Las autoridades señaladas en los párrafos anteriores deberán remitir la información respectiva en los días señalados, conforme a los procedimientos y en los formularios que al efecto les sean proporcionados por el Instituto. 6. El presidente del Consejo General podrá celebrar convenios de cooperación tendentes a que la información a que se refiere este artículo se proporcione puntualmente.

⁴⁴ **Artículo 199 1.** Las solicitudes de trámite realizadas por los ciudadanos que no cumplan con la obligación de acudir a la oficina o módulo del Instituto correspondiente a su domicilio a obtener su credencial para votar con fotografía, a más tardar el último día de marzo del segundo año posterior a aquel en que se hayan presentado, serán canceladas. 2. En el supuesto a que se refiere el párrafo anterior, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores elaborará relaciones con los nombres de los ciudadanos cuyas solicitudes hubiesen sido canceladas, ordenándolas por sección electoral y alfabéticamente, a fin de que sean entregadas a los representantes de los partidos políticos acreditados ante las comisiones distritales, locales y Nacional de Vigilancia, en lo que corresponde, a más tardar el día 30 de abril de cada año, para su conocimiento y observaciones. 3. Dichas relaciones serán exhibidas entre el 1o. y el 31 de mayo, en las oficinas del Instituto, a fin de que surtan efectos de notificación por estrados a los ciudadanos interesados y éstos tengan la posibilidad de solicitar nuevamente su inscripción en el padrón electoral durante el plazo para la campaña intensa a que se refiere el párrafo 1 del artículo 182 de este Código o, en su caso, de interponer el medio de impugnación previsto en el párrafo 6 del artículo 187 de este ordenamiento. 4. Los formatos de las credenciales de los ciudadanos cuya solicitud haya sido cancelada en los términos de los párrafos precedentes, serán destruidos ante las respectivas comisiones de vigilancia en los términos que determine el reglamento. 5. En todo caso, el ciudadano cuya solicitud de trámite registral en el padrón electoral hubiese sido cancelada por omisión en la obtención de su credencial para votar con fotografía en los términos de los párrafos anteriores, podrá solicitar nuevamente su inscripción en los términos y plazos previstos en los artículos 179, 182 y 183 de este Código. 6. Los formatos de las credenciales de los ciudadanos que solicitaron su inscripción al padrón electoral o efectuaron alguna solicitud de actualización durante los dos años anteriores al de la elección, y no hubiesen sido recogidos por sus titulares dentro del plazo legalmente establecido para ello, serán resguardados según lo dispuesto por el párrafo 6 del artículo 180 de este Código. 7. Asimismo, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores dará de baja del padrón electoral a los ciudadanos que hubiesen avisado su cambio de domicilio mediante solicitud en que conste su firma, huellas dactilares, y en su caso, fotografía. En este supuesto, la baja operará exclusivamente por lo que se refiere al registro del domicilio anterior. 8. En aquellos casos en que los ciudadanos hayan sido suspendidos en el ejercicio de sus derechos políticos por resolución judicial, serán excluidos del padrón electoral y de la lista nominal de electores durante el periodo que dure la suspensión. La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores reincorporará al padrón electoral a los ciudadanos que sean rehabilitados en sus derechos políticos una vez que sea notificado por las autoridades competentes, o bien cuando el ciudadano acredite con la documentación correspondiente que ha cesado la causa de la suspensión o ha sido rehabilitado en sus derechos políticos. 9. Serán dados de baja del padrón electoral los ciudadanos que hayan fallecido, siempre y cuando quede acreditado con la documentación de las autoridades competentes o, en su defecto, mediante los procedimientos que determine la Comisión Nacional de Vigilancia. 10. La documentación relativa a los movimientos realizados en el padrón electoral quedará bajo la custodia y responsabilidad de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores y sus vocalías, por un periodo de diez años. Una vez transcurrido este periodo, la Comisión Nacional de Vigilancia determinará el procedimiento de destrucción de dichos documentos. 11. La documentación referida en el párrafo anterior será conservada en medio digital por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores y sus Vocalías.



PODER JUDICIAL

H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

UNA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PRONTA, GRATUITA Y HONESTA ES DIGNA DE ASPIRACIÓN SOCIAL;
A SU REALIZACIÓN USTED PUEDE Y DEBE COLABORAR

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS
JUZGADO ESPECIALIZADO DE CONTROL DEL ÚNICO DISTRITO JUDICIAL,
SEDE XOCHITEPEC, MORELOS
RAMÓN VILLANUEVA URIBE

Sentencia de procedimiento abreviado.

CARPETA TÉCNICA. JC/1598/2019.

a partir del momento en que cause ejecutoria la presente resolución; ordenándose se les haga saber que una vez concluida la condena deberán acudir a las oficinas del Registro Federal de Electores a efecto de que sea reinscrito en el Padrón Electoral.

DECIMO PRIMERO.- Una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, se ordena poner a disposición del Juez de Ejecución al sentenciado ***** a efecto de que compurgue la pena que le ha sido impuesta de **TRES AÑOS, SEIS MESES DE PRISIÓN**, en el Centro Estatal de Reinserción Social que determine el Juez de Ejecución, vía el órgano administrativo correspondiente; de igual manera se le impone la obligación a dicho órgano ejecutor, que informe a este Tribunal con oportunidad, la fecha en la cual el mismo terminará de compurgar dicha sanción. Así como también al Juez de Ejecución en Turno, por medio del Administrador de Salas, para verificar el cumplimiento de las sanciones impuestas.

En su oportunidad, remítase copia certificada de esta resolución a las autoridades correspondientes.

DÉCIMO SEGUNDO.- Hágase saber a las partes que tiene el derecho de impugnar la presente sentencia en un plazo de tres días, a partir de la legal notificación de esta. Lo anterior en términos de lo que establece los artículos 467 fracción X y 471 del código nacional de Procedimientos Penales.

DÉCIMO TERCERO. - Conforme lo dispone el artículo 63 del Código Adjetivo Penal vigente, ténganse la presente sentencia desde este momento legalmente notificada a los intervinientes en la presente audiencia, es decir, al Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada de Combate el Secuestro y la Extorsión, Licenciado **OMAR SAID OLIBARES HERNÁNDEZ**; la Asesor Jurídica Adscrita a la Fiscalía Especializada de Combate el Secuestro y la Extorsión, Licenciada **MARÍA CASANDRA DÍAZ**

MEDINA; la Defensa Particular del acusado Licenciado ***** y al sentenciado ***** para los efectos legales a que haya lugar.

Por lo anteriormente expuesto y además con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, numerales artículos 1, 2, 20, 44, 47, 52, 94, 201, 202, 203, 204, 205, 206 y 406 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es de resolverse y al efecto se:

R E S U E L V E:

PRIMERO.- Se acreditaron plenamente los elementos del delito de **SECUESTRO EQUIPARADO** ilícito que se encuentran previstos y sancionados por el artículo 15 fracciones III y V de la Ley General para Prevenir y Sancionar los delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 7 fracción I (acción e instantáneo), 8 (delitos dolosos o culposos), 9 (doloso) y 13 fracción II (autor material) del Código Penal Federal, por el cual acusó la Representación Social, cometido en agravio de la víctima de iniciales *****

SEGUNDO.- ***** de generales anotados al inicio de esta resolución **ES PENALMENTE RESPONSABLE** en la comisión del delito de **SECUESTRO EQUIPARADO** cometido en agravio de la víctima quien en vida respondiera a las iniciales ***** , **por lo tanto se le impone** una pena privativa de la libertad de **TRES AÑOS, SEIS MESES DE PRISIÓN**, la cual deberá cumplir en el Centro Estatal de Reinserción Social en que determine el Juez de Ejecución que le corresponda conocer del cumplimiento de la presente sentencia, con deducción del tiempo que el sentenciado ha estado priva de su libertad personal desde el día de su detención material, la cual ocurrió el día dos de marzo del año dos mil veinte, esto es, con deducción de **UN AÑOS, TRES MESES y VEINTINUEVE DÍAS**, salvo error aritmético; lo anterior una vez que cause ejecutoria la presente resolución vía el Órgano Jurisdiccional antes indicado.



PODER JUDICIAL

H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

UNA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PRONTA, GRATUITA Y HONESTA ES DIGNA DE ASPIRACIÓN SOCIAL;
A SU REALIZACIÓN USTED PUEDE Y DEBE COLABORAR

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS
JUZGADO ESPECIALIZADO DE CONTROL DEL ÚNICO DISTRITO JUDICIAL,
SEDE XOCHITEPEC, MORELOS
RAMÓN VILLANUEVA URIBE

Sentencia de procedimiento abreviado.

CARPETA TÉCNICA. JC/1598/2019.

TERCERO.- Se impone a ***** una **MULTA** equivalente a **UN MIL CUATROCIENTOS DÍAS MULTA** que de acuerdo a la vigencia de la unidad de medida y actualización en la época de la comisión del hecho delictivo (2020), a razón de **\$86.88 (OCHENTA Y SEIS PESOS 88/100 M.N.)**, resulta la cantidad de **\$121,632.00 (CIENTO VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)**; misma que deberá ser depositada en el Fondo Auxiliar del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado, una vez que cause ejecutoria la presente resolución.

CUARTO.- Por cuanto hace a la **REPARACIÓN DEL DAÑO MORAL y MATERIAL**, se establece la cantidad de **\$100,000.00 (CIEN MIL PESOS 00/100 M.N.)** a favor de la víctima indirecta de iniciales **A.C.G.R.** Lo anterior en razón del acuerdo celebrado el agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada de Combate el Secuestro y la Extorsión, Licenciado **OMAR SAID OLIBARES HERNÁNDEZ**; la Asesor Jurídica Adscrita a la Fiscalía Especializada de Combate el Secuestro y la Extorsión, Licenciada **MARÍA CASANDRA DÍAZ MEDINA**; la Defensa Particular del acusado Licenciado ***** y el sentenciado *****.

QUINTO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 42 del Código Penal Federal, amonéstese y apercíbase de manera pública al sentenciado ***** , haciéndole el señalamiento de las graves consecuencias individuales y sociales del delito que cometió, que es atentatorio a la libertad de las personas, asimismo se le conmina, para que se abstenga de cometer un nuevo delito, toda vez que esto implica graves consecuencias jurídicas en su persona.

SEXTO.- Se suspenden los derechos o prerrogativas al sentenciado ***** por el mismo término de la pena de prisión que le fue impuesta, conforme a lo dispuesto por el artículo 38 fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 45 fracción I y 46 del Código Penal Federal; así como el

artículo 162 párrafos segundo y quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para lo cual, **una vez que cause ejecutoria la presente resolución, se ordena enviar el oficio respectivo** al Órgano correspondiente.

SÉPTIMO.- Una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, se ordena poner a disposición del Juez de Ejecución al sentenciado *********, a efecto de que éste compurgue la pena que le ha sido impuesta de **TRES AÑOS SEIS MESES DE PRISIÓN** en el Centro Estatal de Reinserción Social "Morelos", ubicado en el poblado de Atlacholoaya, perteneciente al municipio de Xochitepec, Morelos.

OCTAVO.- En atención a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 406 del Código Nacional de Procedimientos Penales vigente, remítase copia autorizada de la presente resolución, al Director del Centro Estatal de Atlacholoaya, Morelos y al Titular de la Dirección de Ejecución de Sentencias y Seguimiento de Medidas de Seguridad para su conocimiento y efectos legales procedentes.

NOVENO.- Hágase saber a las partes que tiene el derecho de impugnar la presente sentencia en un plazo de tres días, a partir de la legal notificación de esta. Lo anterior en términos de lo que establece los artículos 467 fracción X y 471 del código nacional de Procedimientos Penales.

DÉCIMO.- Conforme lo dispone el artículo 63 del Código Nacional del Procedimientos Penal vigente en el Estado, ténganse la presente sentencia desde este momento legalmente notificada a los intervinientes en la presente audiencia, es decir, tanto el agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada de Combate el Secuestro y la Extorsión, Licenciado **OMAR SAID OLIBARES HERNÁNDEZ**; la Asesor Jurídica Adscrita a la Fiscalía Especializada de Combate el Secuestro y la Extorsión, Licenciada **MARÍA CASANDRA DÍAZ MEDINA**; la Defensa Particular del acusado Licenciado ********* y el sentenciado *********.



PODER JUDICIAL

H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS
JUZGADO ESPECIALIZADO DE CONTROL DEL ÚNICO DISTRITO JUDICIAL,
SEDE XOCHITEPEC, MORELOS
RAMÓN VILLANUEVA URIBE

Sentencia de procedimiento abreviado.

CARPETA TÉCNICA. JC/1598/2019.

Así lo sentenció en definitiva, certifica y firma **RAMÓN VILLANUEVA URIBE**, Juez Especializado de Control del Único Distrito Judicial, sede Xochitepec, Morelos.

"Este documento constituye una versión pública de su original. En términos de lo previsto en los artículos 3, fracción II, 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos".

UNA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PRONTA, GRATUITA Y HONESTA ES DIGNA DE ASPIRACIÓN SOCIAL;
A SU REALIZACIÓN USTED PUEDE Y DEBE COLABORAR